

Capítulo 1.

Fortalecer la participación, la gestión pública y la integridad para generar confianza y apoyar la transición verde en América Latina y el Caribe

La necesidad de una transición verde representa tanto un reto como una oportunidad para los países de América Latina y el Caribe (ALC). La región se enfrenta a retos estructurales particulares, incluyendo sistemas de protección social frágiles, baja productividad y poca confianza en las instituciones públicas. Además, ALC es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático (OCDE et al., 2022^[1]). Los gobiernos deben asegurarse de aprovechar la transición verde como una oportunidad para abordar las desigualdades estructurales y, al mismo tiempo, fomentar la sostenibilidad.

Las democracias de la región de ALC han estado consolidándose. Estas cuentan con sistemas institucionales más sólidos para proteger y promover los derechos y libertades individuales, que a la vez permiten mejoras al bienestar sostenibles a largo plazo. Al mismo tiempo, los países de la región operan en un entorno de múltiples crisis agudizadas por los altos niveles de interdependencia y de exposición a choques externos. En una democracia, la resiliencia garantiza que el sistema pueda resistir retos y amenazas sin dejar de responder a las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos. Esta resiliencia fomenta un entorno de estabilidad y previsibilidad, esencial para que los ciudadanos confíen en las instituciones que los gobiernan y para generar confianza.

Mantener la resiliencia democrática es clave para que los países de la región de ALC lleven a cabo con éxito una transición verde justa. Esto significa mantener instituciones de alta calidad que garanticen un gobierno representativo y un compromiso participativo junto con el respeto de los derechos fundamentales, que fomenten prácticas de gobernanza que puedan abordar problemas emergentes y se adapten a circunstancias cambiantes y promuevan políticas equitativas e inclusivas. En las democracias, la búsqueda continua de la confianza permite a los gobiernos construir y mejorar el consenso público para aplicar la combinación de políticas públicas climáticas, energéticas, sociales, macroeconómicas y fiscales que son necesarias para la transición verde (OCDE et al., 2022^[2]).

En este Capítulo se analiza cómo los gobiernos de los países de ALC pueden sacar mejor provecho de una gobernanza pública sólida para lograr una transición económica verde y equitativa, y se abordan al mismo tiempo las desigualdades subyacentes de la región y sus retos estructurales. En la sección siguiente se describen los principales retos a los que se enfrenta la región y se traza un trayecto hacia una transición verde justa para superar dichos retos, enfatizando el papel de la gobernanza pública. Luego, el Capítulo explora tres dimensiones para la acción. En primer lugar, mejorar los procesos y políticas inclusivos y participativos para superar las lagunas de representación y generar confianza. En segundo lugar, reforzar las competencias clave en las instituciones públicas para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. En tercer lugar, proteger el interés público contra la corrupción, la erosión de la integridad pública y la influencia indebida. Al priorizar todas estas áreas en forma conjunta, los gobiernos de la región de ALC pueden contribuir a alcanzar el doble objetivo de estabilidad democrática y un crecimiento sostenible e inclusivo.

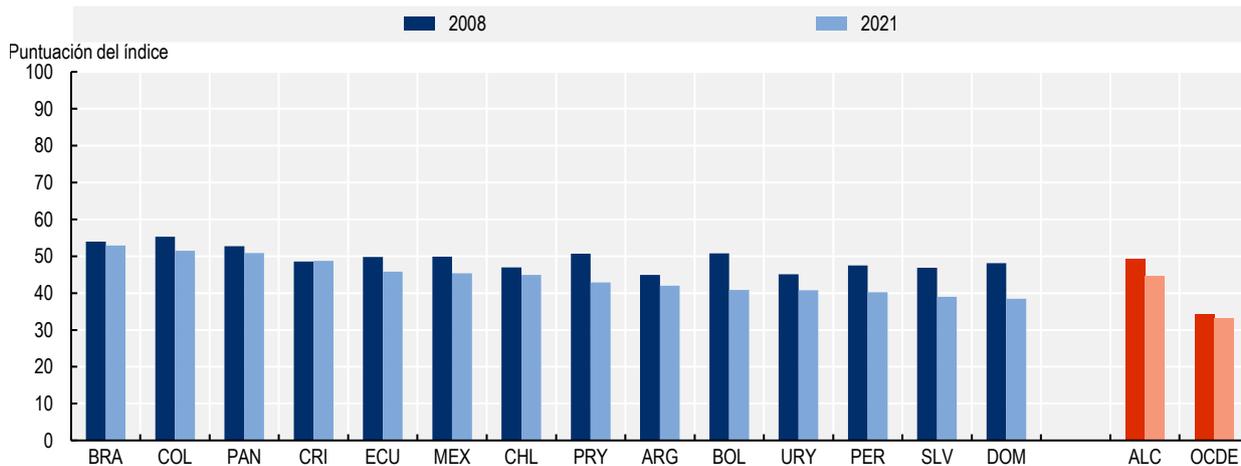
1.1. Utilizar la gobernanza pública para una transición socioeconómica sostenible e inclusiva

1.1.1. Desigualdad, cambio climático y falta de confianza

La desigualdad en los ingresos sigue siendo un problema importante en muchos países de ALC. Durante las dos décadas previas a la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países de la región lograron avances significativos en la reducción de la desigualdad en los ingresos (OCDE, 2021^[3]; OCDE, 2020^[4]). No obstante, esta desigualdad sigue siendo elevada y continúa dificultando la cohesión social y económica entre diferentes grupos de la población (Gráfico 1.1). Los altos niveles de inflación durante 2022 y 2023 redujeron los ingresos reales en toda la región y empeoraron los niveles de desigualdad, especialmente entre los que están en el extremo inferior de la escala. Durante los cinco primeros meses de 2022, el aumento promedio de precios que los hogares en situación de pobreza extrema en la región de ALC sufrieron fue de 3.6 puntos porcentuales (p.p.), cifra superior al aumento experimentado por el hogar promedio (Gráfico 1.2). Esto puede explicarse por el hecho de que el aumento de precios afectó principalmente a insumos básicos como los alimentos y la energía, que constituyen una mayor parte del gasto de los hogares más pobres. En su conjunto, las tasas de pobreza a finales de 2022 se mantuvieron por encima de los niveles anteriores a la pandemia, con un 32.1% de la población de la región en situación de pobreza y un 13.1% en situación de pobreza extrema (CEPAL, 2022^[5]).

Gráfico 1.1. Desigualdad en los ingresos en los países de América Latina y el Caribe, 2008 y 2021

Índice de Gini para los países de ALC

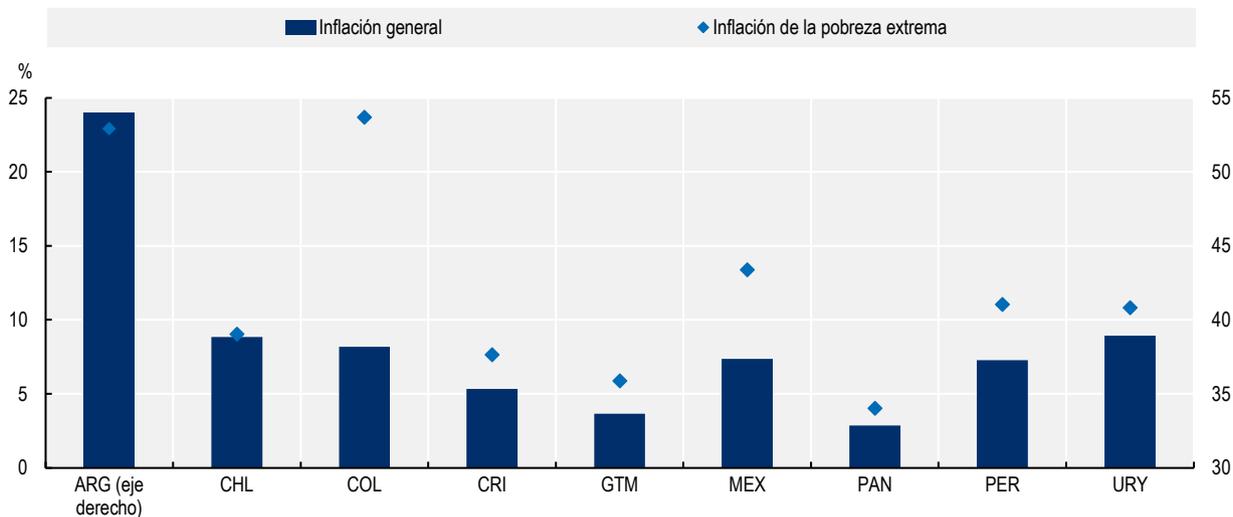


Nota: El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución de la renta (o, en algunos casos, del gasto de consumo) entre los individuos u hogares de una economía se desvía de una distribución perfectamente igualitaria. Así, un índice de Gini de 0 representa una igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 implica una desigualdad perfecta. Los datos de 2021 para Chile y México corresponden a 2020. Los datos de 2008 para Chile son de 2009. La media de la OCDE de 2021 corresponde a 2020.

Fuente: Banco Mundial, Plataforma de Pobreza y Desigualdad. Los datos se basan en encuestas de hogares realizadas por organismos estadísticos gubernamentales y departamentos nacionales del Banco Mundial. Los datos de los países de la OCDE proceden en su mayoría de la base de datos del Luxembourg Income Study. Para más información y metodología, véase <https://pip.worldbank.org/>.

StatLink <https://stat.link/vsucyi>

Gráfico 1.2. Niveles de inflación de la población en general y de los que están en situación de pobreza extrema en países seleccionados de ALC, cinco primeros meses de 2022



Nota: Argentina se representa en el eje de la derecha. Promedio en lo que va del año del crecimiento interanual de los índices nacionales de precios al consumo (IPC) frente al crecimiento de los umbrales de pobreza extrema 2022. Las líneas de pobreza extrema se basan en el costo de la canasta básica que cubre las necesidades alimentarias básicas y proporciona las necesidades calóricas mínimas de los miembros de un hogar de referencia. La línea de pobreza extrema chilena incluye también una parte de bienes y servicios básicos no alimentarios. En el caso de Colombia y Perú, se utilizó la división de alimentos y bebidas no alcohólicas de su IPC. En el caso de Panamá, los datos cubren los distritos de Panamá y San Miguelito.

Fuente: OCDE et al. (2022_[2]), *Perspectivas Económicas de América Latina 2022: Hacia una transición verde y justa*.

StatLink <https://stat.link/xtbeho>

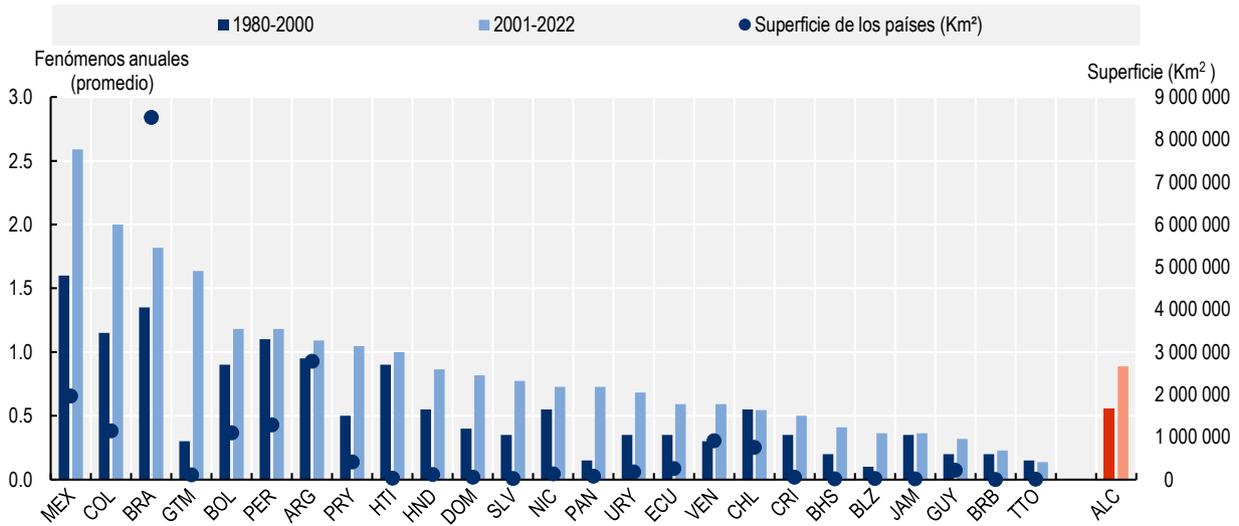
Las posibilidades de abordar los niveles de desigualdad y pobreza se ven afectadas por las débiles perspectivas de crecimiento económico. La región de ALC experimentó una grave recesión durante la pandemia de COVID-19, con una caída de 7.0% del producto interno bruto (PIB) en 2020. Tras un fuerte repunte en 2021 (7.4%), el crecimiento desaceleró durante los choques de 2022. A mediano plazo, se prevé que el crecimiento en la región de ALC se mantenga entre 2.3% y 2.6% durante los próximos cinco años, por debajo de la media mundial (FMI, 2023^[6]). El crecimiento de la región parece afrontar retos estructurales. La OCDE ha estimado que las tasas de crecimiento potencial per cápita en ALC son sustancialmente inferiores a las de las economías más avanzadas (OCDE et al., 2022^[2]).

Con frecuencia, la desigualdad económica actúa como catalizador de disparidades sociales, ya que las diferencias de ingresos limitan el acceso a recursos y servicios esenciales. En consecuencia, los niveles de satisfacción con el sistema de salud y la confianza en el sistema judicial son más bajos en ALC que en el promedio de los países de la OCDE (véase el Capítulo 2). La intersección de las disparidades económicas y las desigualdades sociales también agrava los retos a los que se enfrentan los grupos marginados en los países de ALC, incluyendo a las mujeres, minorías y comunidades originarias. Por ejemplo, las desigualdades se entrecruzan en todas las etapas de la vida de las mujeres, limitando su acceso a la justicia, a los derechos y a las oportunidades de empoderamiento y perpetuando las brechas en áreas como educación, empleo y salud. Esto obstaculiza el avance hacia una transformación social basada en derechos que beneficie a todos los grupos sociales (OCDE, 2023^[7]). Los bajos niveles de educación también pueden afectar significativamente la capacidad de toma de decisiones políticas de estas poblaciones y obstaculizar los niveles de participación, dejando a los desfavorecidos con un margen de acción política limitado. Los datos de la Encuesta sobre Confianza de la OCDE muestran que la eficacia política tiene implicaciones considerables en la fuerza de la democracia representativa (OCDE, 2022^[8]). Por ejemplo, en Colombia, 61% de las personas con un nivel educativo alto se consideran estar bien preparadas para entender la política, frente a 45% de las personas con un nivel educativo bajo.

Un segundo conjunto importante de retos a los que se enfrenta la región de ALC son los impactos del cambio climático. Gran parte de la región está situada en una zona muy vulnerable a los problemas relacionados con el clima (OCDE, 2023^[9]), desde la subida del nivel del mar, que afecta a las zonas costeras bajas, hasta fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y graves, como huracanes y sequías. De hecho, en comparación con las décadas entre 1980 y 2000, el número promedio de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima ya ha aumentado un 60.2% de promedio en la región de ALC entre 2001 y 2022, y está aumentando en la mayoría de los países (Gráfico 1.3) (OCDE et al., 2022^[1]). La vulnerabilidad de la región se debe a una combinación de factores, empezando por la ubicación geográfica, pero también la escasez de infraestructuras resistentes a las catástrofes, la dependencia económica de sectores sensibles al clima como la agricultura, y centros urbanos costeros densamente poblados. Las consecuencias del cambio climático ya se dejan sentir en forma de alteración de los ecosistemas, escasez de agua, inseguridad alimentaria y desplazamientos de población.

Es probable que el cambio climático agrave los ya elevados niveles de desigualdad en los países de ALC. Los grupos vulnerables suelen ser los más afectados por las catástrofes naturales, por ejemplo, debido a la pérdida de tierras y a la falta de acceso a agua o alimentos (OCDE et al., 2022^[11]). El cambio climático llevará a la pobreza a 5 millones más de latinoamericanos de aquí a 2030 (Jafino et al., 2020^[10]).

Gráfico 1.3. Frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima en ALC, 1980-2000 y 2001-22

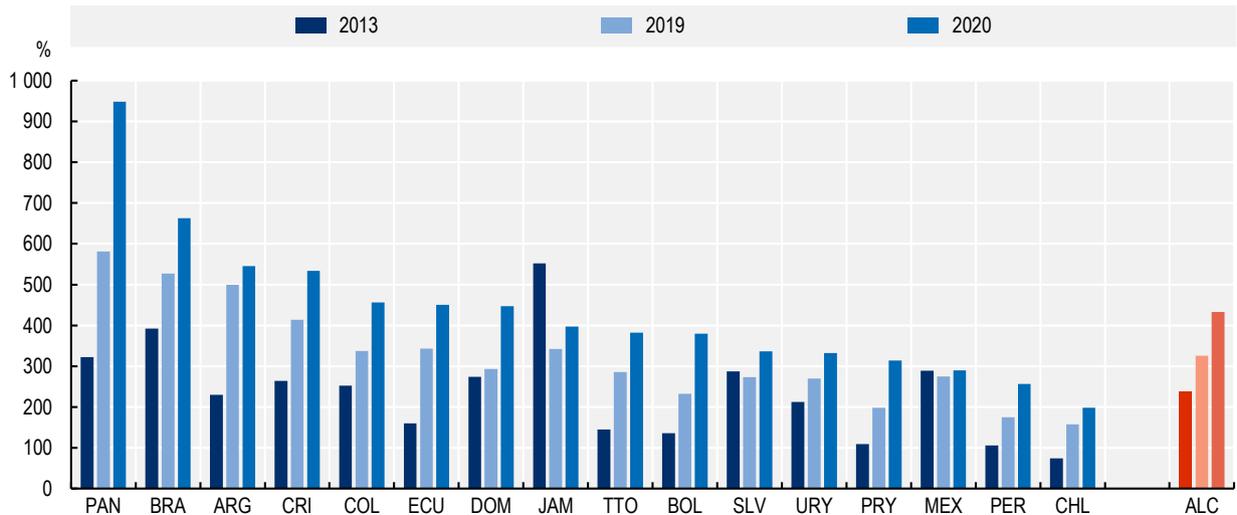


Nota: Basado en Alejos (2018^[11]), los fenómenos meteorológicos extremos se definieron como una catástrofe natural que afecta a 100 000 o más personas, o provoca 1 000 o más muertes, o causa daños económicos estimados en al menos un 2% del PIB. Se consideraron las siguientes catástrofes naturales: derrumbes, tormentas, sequías e inundaciones. El eje secundario se refiere a la superficie de los países. Fuente: OCDE et al. (2022^[2]), *Perspectivas Económicas de América Latina 2022: Hacia una transición verde y justa*, <https://doi.org/10.1787/3d5554fc-en>.

StatLink <https://stat.link/kc03rn>

Los gobiernos también disponen de un espacio fiscal limitado para financiar sus medidas contra la desigualdad, el cambio climático y otros problemas medioambientales. Los gobiernos de ALC se enfrentan al doble reto del aumento de la carga de la deuda pública y de los bajos niveles de movilización de los ingresos nacionales. La deuda bruta de las administraciones públicas de la región de ALC ha pasado de 46% del PIB en 2007 –antes de la crisis financiera mundial– a alrededor de 66% del PIB en 2022. Aunque muchos países tienen niveles de deuda más elevados, el problema se ve agravado por los bajos niveles de movilización de los ingresos nacionales. En 2021, el promedio de la relación entre impuestos y PIB en los países de ALC era de 21.7% del PIB, frente a 34.2% de los países de la OCDE (véase el Capítulo 10). La diferencia se explica principalmente por los bajos ingresos de la región procedentes de los impuestos sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social en comparación con el promedio de la OCDE. En consecuencia, los coeficientes deuda-impuestos han aumentado considerablemente en la mayoría de los países de ALC (Gráfico 1.4). Los elevados ratios de deuda obligan a los gobiernos a dedicar una proporción considerable del gasto al pago de la deuda pública, lo que deja menos fondos para otros temas. Este problema se puede haber agravado por las subidas de los tipos de interés experimentadas en 2022.

Gráfico 1.4. Relación entre deuda pública bruta e impuestos en países seleccionados de ALC, 2013, 2019 y 2020

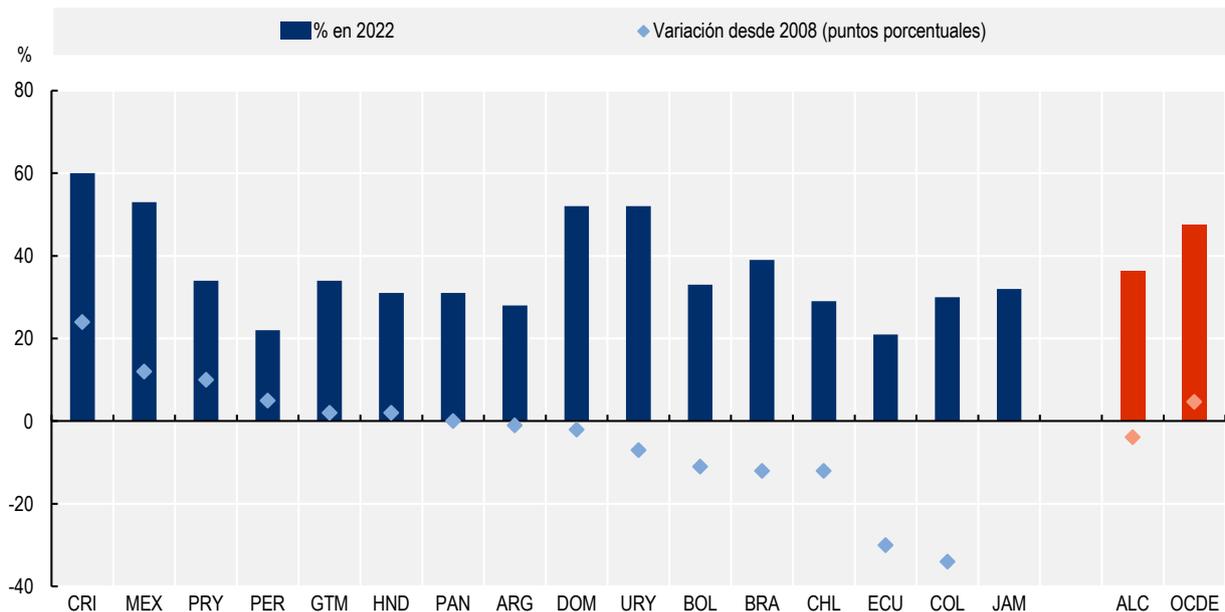


Fuente: OCDE *et al.* (2022_[12]), *Perspectivas Económicas de América Latina 2022: Hacia una transición verde y justa*, <https://doi.org/10.1787/3d5554fc-en>.

StatLink  <https://stat.link/17hgic>

El tercer reto al que la región de ALC se enfrenta es la falta de confianza de la población en sus gobiernos y en las instituciones públicas. En los países democráticos, la confianza es un indicador importante de cómo la gente percibe la calidad de las instituciones públicas y cómo interactúa con ellas. Aunque reformas institucionales sólidas han permitido que más personas en ALC ejerzan sus derechos políticos, y los procedimientos electorales han funcionado razonablemente bien en el continente, los niveles de confianza pública en la región siguen siendo inferiores a los de los países de la OCDE y otras regiones (OCDE, 2023_[12]). Además, la confianza ha disminuido en la última década en la región, y en 2022 solo el 36.3% de los habitantes de los países de ALC expresaron confianza en su gobierno, 3.9 p.p. menos que en 2008 (Gráfico 1.5).

Gráfico 1.5. Confianza en el gobierno nacional, 2022 y su cambio desde 2008



Fuente: Encuesta Mundial Gallup 2023 (base de datos).

StatLink  <https://stat.link/isd0r9>

Para llevar a cabo reformas y establecer prioridades con legitimidad se requiere un cierto nivel de confianza. Sin la confianza suficiente en las instituciones públicas, la eficacia de las políticas e iniciativas públicas puede verse comprometida. Esto es especialmente relevante en el caso de las políticas cuyo perfil temporal de los beneficios es incierto, en las que el público está incurriendo en costos en el momento, con la esperanza de generar beneficios en el futuro. Todos los beneficios futuros conllevan un cierto grado de incertidumbre, y el público solo apoyará una inversión si cree que el gobierno tiene la competencia y los valores para llevarla a cabo. Un mayor nivel de confianza en el gobierno facilita el consenso y la acción colectiva, así como la voluntad de apoyar reformas políticas que impliquen sacrificios a corto plazo para grupos específicos, a cambio de beneficios a largo plazo muy significativos pero difusos (OCDE, 2022^[8]). Si los gobiernos hacen promesas claras sobre lo que los ciudadanos pueden esperar de ellos y aplican reformas que les permitan cumplir sus promesas, se puede fortalecer la confianza de los ciudadanos hacia el gobierno (Keefer y Scartascini (2022^[13])).

A la vez, los niveles de confianza y la acción efectiva sobre el clima son interdependientes. Existe un amplio consenso entre los países de ALC sobre el hecho de que el cambio climático es un problema importante que requiere una respuesta de todo el gobierno y de la sociedad. Sin embargo, tener consenso sobre la conveniencia de abordar la crisis climática no es suficiente para garantizar respuestas efectivas de políticas públicas, ya que gran parte del éxito depende de la capacidad del gobierno para generar confianza y consenso para la acción. En concreto, la confianza en las instituciones públicas puede mejorar la viabilidad y la eficacia de las políticas climáticas: i) resolviendo los intereses contrapuestos entre grupos de población (problemas de acción colectiva); ii) creando espacio para políticas sostenibles a largo plazo; iii) aumentando la aceptabilidad de las políticas medioambientales; y iv) facilitando la creación de coaliciones amplias a favor de las políticas de cambio climático que perduren más allá de los ciclos electorales (GOV/PGC/RPC/SBO(2021)1).

La erosión de confianza en las instituciones públicas y la persistencia de altos niveles de desigualdad en la región de ALC no son fenómenos aislados. De hecho, están profundamente interconectados, formando un ciclo de retroalimentación que agrava los retos de la región. La desconfianza que sienten los ciudadanos respecto a sus gobiernos suele estar arraigada en la percepción de que estos no están abordando eficazmente la desigualdad (Keefer y Scartascini (2022^[13])), y que las instituciones públicas carecen de las competencias o de los valores necesarios para mejorar los estándares de vida. Cuando la gente nota que persisten las desigualdades económicas, que las oportunidades están distribuidas desigualmente y que los grupos marginados siguen sufriendo discriminación, se pierde la confianza en que las instituciones públicas serán capaces de lograr un cambio positivo. Esto, a su vez, dificulta la promulgación de las políticas necesarias para abordar los problemas regionales, en particular debido a los costos que las políticas imponen por adelantado a segmentos grandes de la población. Esta falta de confianza también puede conducir a un menor cumplimiento de las políticas por parte de la población y a una menor disposición a cooperar con las iniciativas gubernamentales destinadas a reducir la desigualdad (Keefer y Scartascini (2022^[13])).

La confianza en las instituciones públicas democráticas es un concepto multidimensional impulsado por dos componentes complementarios que pueden ser abordados por los gobiernos: la competencia y los valores. La competencia puede entenderse como la aptitud, la capacidad y el buen juicio necesarios para cumplir un mandato específico. Las instituciones públicas demuestran su competencia respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y siendo fiables a la hora de afrontar retos complejos, anticiparse a los riesgos y minimizar la incertidumbre. Por valores se entienden las intenciones y principios que guían el accionar público. Los valores se reflejan en la apertura, transparencia, integridad y equidad de las operaciones gubernamentales (OCDE, 2023^[12]). Los niveles de confianza también se ven influenciados por las condiciones económicas, culturales e institucionales de un país (Brezzi et al., 2021^[14]).

Las lecciones de otros países son importantes. La Encuesta sobre Confianza de la OCDE reveló que en 2021 el 50% de los ciudadanos de 22 países de la OCDE creían que sus gobiernos debían continuar trabajando en la lucha contra el cambio climático, pero solo un poco más de un tercio (35.5%), en promedio, confiaba en que su país lograría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (OCDE, 2022^[8]). Es posible que los ciudadanos no confíen en que las instituciones públicas sean lo suficientemente competentes y fiables como para aplicar políticas eficaces y duraderas que generen beneficios (OCDE, 2022^[15]). A nivel internacional, la confianza de los ciudadanos en que su país reducirá las emisiones de GEI tiene un impacto positivo en la confianza en el gobierno nacional. En otras palabras, invertir en la gobernanza pública para aplicar políticas más eficaces de lucha contra el cambio climático puede ayudar a aumentar la credibilidad y la confianza en el gobierno en general (OCDE, 2022^[15]).

1.1.2. Hacia una transición verde justa

El éxito de una transición verde justa en ALC requerirá de una combinación de recursos financieros significativos, marcos de políticas públicas claros y cooperación internacional. Para liderar dicha transición, los países de ALC necesitan contar con una estrategia coordinada, buenas regulaciones que tengan en cuenta a todos los grupos poblacionales y, aún más importante, una gobernanza pública coherente para gestionar estos recursos eficientemente. Los esfuerzos de esta transición deben tener como objetivo crear oportunidades de crecimiento económico sostenible y hacer frente a los retos medioambientales, mejorar la calidad de vida de los diferentes grupos que viven en la región y apoyar la confianza en las instituciones públicas a largo plazo. Una estrategia de gobernanza pública exhaustiva y que perdure debe aspirar a lograr tanto la inclusión como el desarrollo sostenible.

Es fundamental situar la inclusión en el primer plano de las políticas públicas. Una transición justa exige un compromiso firme con la inclusión, reconociendo que el desarrollo sostenible y equitativo solo es posible cuando todos los segmentos de la sociedad están empoderados y tienen la oportunidad de prosperar. Para superar las brechas existentes en el acceso a servicios de alta calidad, los gobiernos deben contar con una gobernanza pública firme que trabaje activamente para garantizar la igualdad de acceso, la inclusión en la toma de decisiones públicas y políticas que aborden las necesidades individuales de las personas para mejorar su calidad de vida. Además, una transición justa no solo requiere que los beneficios del desarrollo se distribuyan equitativamente entre la población, sino que también debe salvaguardar el bienestar de las generaciones futuras.

La búsqueda de un futuro sostenible y resiliente requiere tanto recuperación como reconstrucción, centrándose tanto en la economía como en el medio ambiente. Desde el punto de vista económico, la recuperación debe dar prioridad a la creación de empleos, apoyo a las pequeñas empresas y estabilidad económica en general, especialmente tras las crisis mundiales. Desde el punto de vista medioambiental, la recuperación debe hacer énfasis en la restauración de los ecosistemas, reducción de las emisiones de carbono y preservación de la biodiversidad. Este doble enfoque reconoce la interconexión entre el bienestar económico y la salud medioambiental, garantizando que, a medida que los países reconstruyen sus economías, lo hacen en armonía con el planeta, salvaguardando los recursos que lo sustentan a largo plazo.

La transición verde en ALC requiere compromiso, estrategias, planes y programas a largo plazo para ejecutar las prioridades sobre neutralidad climática y resiliencia. Recientemente, la OCDE ha publicado consejos sobre el uso de herramientas y procesos de gobernanza para abordar la crisis climática, identificando 15 prioridades políticas clave para crear resiliencia climática (OCDE, 2023^[9]). También ha propuesto un marco para crear consenso y confianza en la población con el fin de aplicar políticas verdes en la próxima década, utilizando las herramientas adecuadas para la acción climática y medioambiental y construyendo un sector público más capaz, receptivo y resistente (véase el Recuadro 1.1).

Recuadro 1.1. Un marco de gobernanza pública para obtener resultados medioambientales

La OCDE ha creado un marco que explica cómo la buena gobernanza pública puede influir en los resultados medioambientales. Consta de cinco componentes clave: dirigir, garantizar la implementación, liderar con el ejemplo, fomentar el sentido de propiedad y el apoyo, e influir y coordinar a nivel mundial.

Dirigir

- Establecer la ambición política y agenda necesarias, incluyendo una visión estratégica a largo plazo.
- Diseñar y formular políticas públicas y gestionar sus interacciones y compensaciones mediante una planificación y coordinación estratégica adecuadas.

Garantizar la implementación

- Garantizar la implementación y el cumplimiento de las políticas en la práctica mediante herramientas de gestión pública centrales e innovadoras.

Liderar con el ejemplo

- Adoptar medidas enérgicas para que la contratación pública, los servicios y los activos sean más verdes, promoviendo un efecto dominó de adaptación.

Fomentar el sentido de propiedad y el apoyo

- Promover la aceptación pública de las reformas y las posibles compensaciones necesarias para tomar acción sobre el clima y otros objetivos verdes.

Influir y coordinar a nivel mundial

- Crear herramientas y capacidades gubernamentales para afrontar los retos mundiales y considerar el impacto internacional de las medidas políticas.

Fuente: OCDE (2022^[15]), *Generar confianza y fortalecer la democracia: Preparando el terreno para la acción gubernamental*, <https://doi.org/10.1787/76972a4a-en>.

La transición también requiere adaptabilidad. Los gobiernos deben estar preparados para ajustar sus políticas y estrategias a medida que surjan nuevos retos medioambientales, sociales y económicos. Al permitir adaptabilidad y reacciones flexibles en momentos de crisis, el centro de gobierno (CdG) puede servir como piedra angular para dar respuestas y ejecutar transformaciones eficaces. Este órgano administrativo central debe ser capaz de coordinar e integrar diversos ministerios y organismos, desarmando los aislamientos para garantizar un enfoque holístico de las cuestiones medioambientales. Esto implica fijar objetivos claros de sostenibilidad y evaluar periódicamente los avances mediante parámetros basados en datos. El CdG puede facilitar la asignación de recursos a áreas prioritarias, promover la colaboración intersectorial y agilizar los procesos de toma de decisiones.

1.2. Reforzar la gobernanza pública para mejorar la participación y la formulación de políticas inclusivas

Los países latinoamericanos tienen una gran diversidad de grupos étnicos y sociales. Los procesos de toma de decisiones inclusivos y democráticos en la región deben reflejar esta diversidad, implicando activamente a todos los segmentos de la sociedad en los debates políticos, los procesos de toma de decisiones y la asignación de recursos. Las políticas inclusivas, la educación y las oportunidades de empleo empoderan a las personas de todos los orígenes, garantizando que tengan una oportunidad justa de participar y beneficiarse del entramado económico y social de sus comunidades. Además, si quieren lograr un crecimiento sostenible e inclusivo y, en particular, ser capaces de enfrentar las crisis climática y medioambiental, los países de ALC deben hacer mayor uso de la voz de sus ciudadanos. Los gobiernos de la región pueden aprovechar sus puntos

fuerzas en materia de participación, inclusión, innovación y cooperación para mejorar la capacidad de resolver problemas complejos y aportar soluciones novedosas.

Esta sección expone las acciones que pueden llevar a cabo los países de ALC para mejorar la participación democrática efectiva en la política y la toma de decisiones. También plantea la forma en que pueden utilizar la gobernanza pública para promover la inclusión mediante la formulación de políticas que aborden las necesidades y los retos de los diferentes grupos demográficos. Se considera que la participación es democrática cuando todas las personas afectadas por la decisión tienen las mismas posibilidades de influir en la propia decisión (Warren, 2022^[16]) y cuando se recaban las opiniones de las diferentes partes interesadas en el ciclo político (OCDE, 2022^[15]). Las formas más avanzadas de participación y representación política pueden ayudar a los gobiernos de la región a construir una transición justa y verde y a reforzar la confianza.

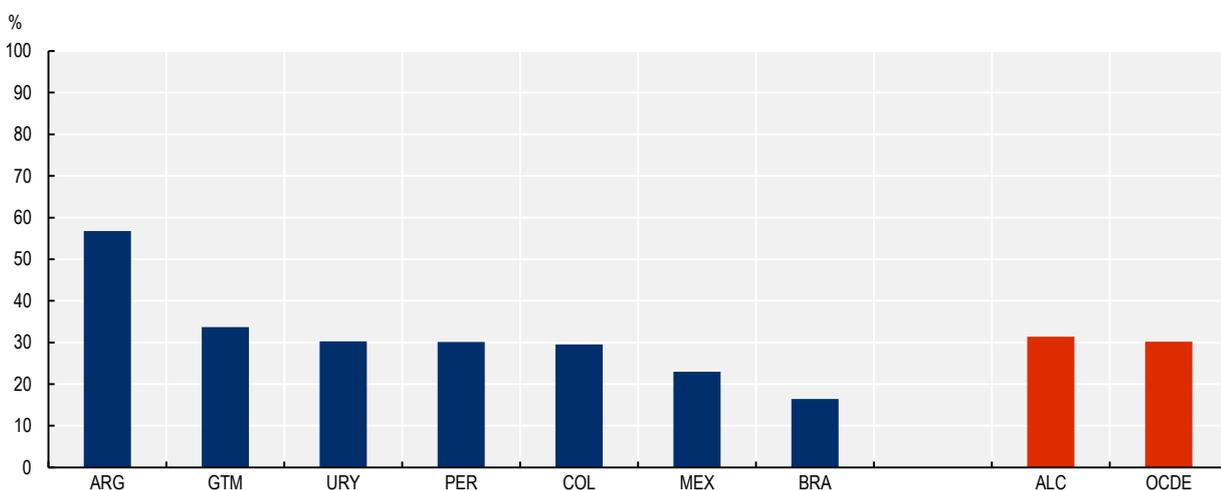
1.2.1. Participación y vinculación de partes interesadas en la toma de decisiones públicas

En muchos países, el público tiene oportunidades limitadas de expresar sus preferencias y de participar de manera significativa en los procesos democráticos. Según la Encuesta Mundial de Valores, solo 31.4% de la población de siete países de ALC creen que pueden opinar sobre lo que hace el gobierno (Gráfico 1.6). Teniendo en cuenta que la esencia de la democracia gira en torno al ejercicio del poder a través de los gobernados, los ciudadanos deben tener la expectativa de que la representación política y los procesos participativos les ofrezcan suficiente influencia sobre la toma de decisiones gubernamentales (OCDE, 2022^[15]). La gobernanza pública inclusiva debe tener como objetivo permitir la participación de una amplia gama de grupos de la sociedad a lo largo de todo el ciclo de elaboración de políticas, mediante el uso de mecanismos inclusivos y participativos. Dichos mecanismos pueden fomentar un mayor sentido de pertenencia, evitar la marginación de determinados grupos y generar confianza en las instituciones públicas, fortaleciendo en definitiva los sistemas democráticos y reduciendo las profundas disparidades que caracterizan desde hace tiempo a las sociedades de ALC.

Muchos gobiernos recurren ahora a la participación pública para involucrar más a los ciudadanos. Para garantizar el apoyo a los sistemas democráticos de cara a futuras crisis, es importante que los gobiernos busquen las formas de participación ciudadana más eficaces que sirvan para complementar los procedimientos actuales de democracia representativa. La institucionalización de normas y procesos eficaces en favor de la participación pública de forma coherente con la democracia representativa será clave en la creación de resiliencia democrática con miras a un crecimiento inclusivo y sostenible.

Gráfico 1.6. Poder opinar sobre lo que hace el gobierno, 2022 (o último año disponible)

Porcentaje de la población que confía en que el sistema político le permite tener una opinión sobre lo que hace el gobierno



Nota: Los datos de Argentina corresponden a 2017; los de Brasil, Colombia, México y Perú, a 2018; los de Nicaragua, a 2020, y los de Uruguay, a 2022. El promedio de ALC se basa en los países que figuran en el gráfico.

Fuentes: Cálculos propios basados en la Encuesta Mundial de Valores, 2017-22; Encuesta sobre Confianza OCDE (<http://oe.cd/trust>).

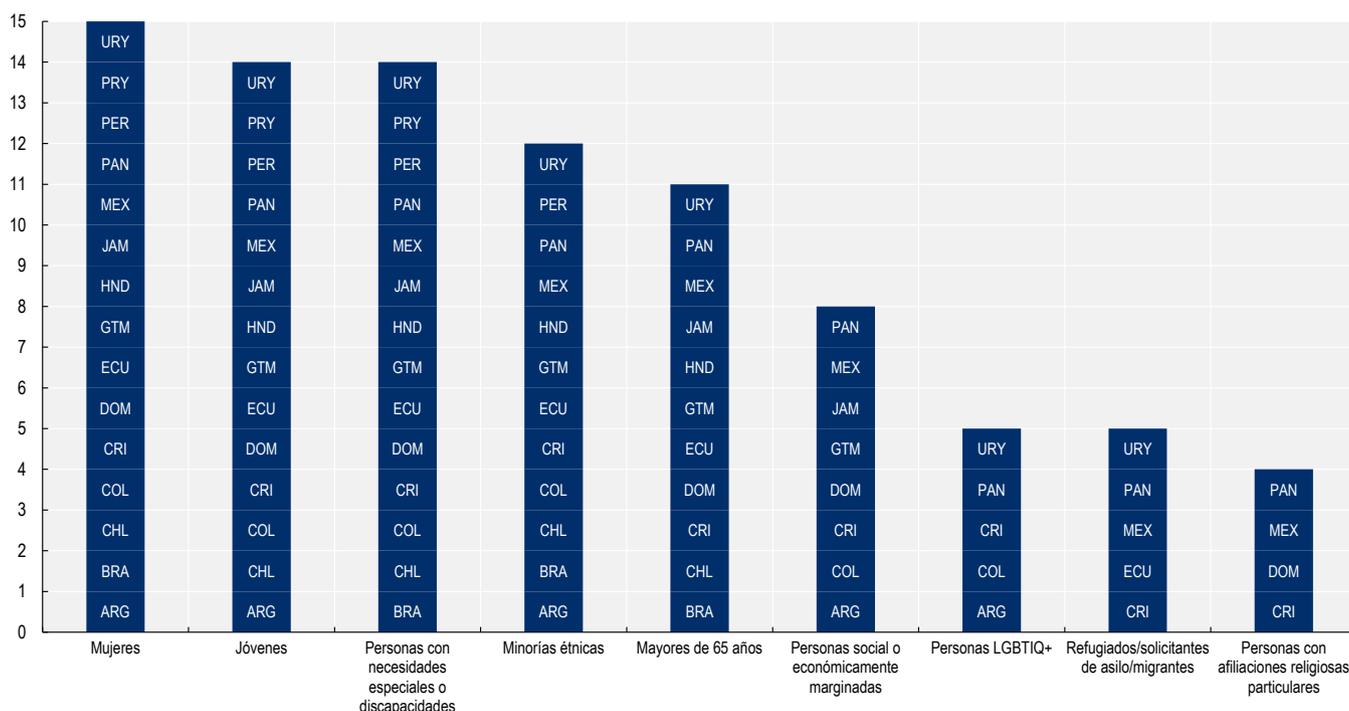
StatLink  <https://stat.link/2a8diz>

La toma de decisiones de forma participativa puede hacer los procesos políticos más inclusivos y que sus resultados se alineen más con las necesidades de los diferentes grupos de la sociedad. La mayoría de los países de ALC cuenta con una estrategia para fomentar la participación de las mujeres, los jóvenes y las personas con necesidades especiales o discapacidades en la toma de decisiones (Gráfico 1.7). Esto muestra el compromiso de promover la igualdad de acceso a la participación pública en la región. Este tipo de estrategias pueden ayudar a los gobiernos a empoderar a estas comunidades históricamente marginadas y a trabajar para derribar las barreras que han impedido su plena participación en la toma de decisiones públicas.

Empoderar e involucrar a los jóvenes a fin de abordar consideraciones intergeneracionales en las funciones básicas del gobierno también es fundamental para una recuperación sostenible e inclusiva. Muchas organizaciones de jóvenes están preocupadas por la falta de oportunidades para los jóvenes de participar en el diseño de las medidas de respuesta y recuperación de los gobiernos. Por ejemplo, la crisis de la COVID-19 generó incertidumbre entre los jóvenes, y si sus puntos de vista sobre las políticas no son tomados en cuenta durante este tipo de crisis, este grupo corre un mayor riesgo de exclusión, de menos empleo y de tasas de pobreza más altas (OCDE, 2022^[17]). Solo 15% de la población de los países de la OCDE consideraba que su gobierno tuvo en cuenta la opinión de los jóvenes a la hora de adoptar medidas de cuarentena y confinamiento. Del mismo modo, más de un tercio de las organizaciones de jóvenes de países de la OCDE (38%) estimó que la confianza de sus miembros en el gobierno había disminuido desde el inicio de la crisis de la COVID-19, mientras que solo el 16% informó un aumento (OCDE, 2022^[17]).

La gobernanza inclusiva también puede fomentar la confianza en las instituciones públicas entre las comunidades marginadas, dándoles participación en la dirección de las políticas públicas. Cuando las libertades cívicas fundamentales están garantizadas y a medida que los grupos marginados tienen acceso a oportunidades y recursos, les resulta más fácil participar en la vida cívica y en los procesos democráticos, lo que también puede mejorar las instituciones democráticas (OCDE, 2022^[18]). Este compromiso, a su vez, puede hacer que los gobiernos respondan mejor a las necesidades de todos los ciudadanos. Por lo tanto, al apostar por la inclusión, los países de ALC no solo podrían dar pasos importantes hacia la reducción de las desigualdades políticas, sino también podrían sentar las bases de una resiliencia democrática duradera frente a la evolución de la dinámica social. Dicho esto, solo la mitad de los países de ALC encuestados cuentan con estrategias para fomentar la participación de personas marginadas social o económicamente en la toma de decisiones, lo que limita las oportunidades de escuchar a estos grupos y de abordar sus preocupaciones (Gráfico 1.7).

Gráfico 1.7. Grupos para los que existe una estrategia o política específica para fomentar su participación en la toma de decisiones, 2021



Fuentes: OCDE-BID (2022), Encuesta sobre Gobierno Abierto; OCDE (2021), Encuesta sobre Gobierno Abierto.

StatLink  <https://stat.link/kj170d>

Los países deben diseñar procesos de participación y consulta que permitan a las personas alcanzar una postura negociada y crear consenso respecto a cambios políticos importantes y potencialmente controvertidos, como la transición verde. Esta transición puede implicar un movimiento de recursos entre sectores económicos y grupos políticos, lo que podría desencadenar la oposición de grupos de interés. Animar a la población, grupos de la sociedad civil, representantes de grupos minoritarios y comunidades locales a participar en todo el proceso de elaboración de políticas puede promover una mayor identificación con las políticas y políticas más inclusivas que tengan en cuenta sus necesidades. Los responsables políticos también deben involucrar al sector privado concientizándolo sobre prácticas empresariales responsables. Es fundamental adaptar las estrategias de consulta a los contextos sociopolíticos específicos, así como idear estrategias de comunicación empáticas y empoderadoras para las reformas propuestas.

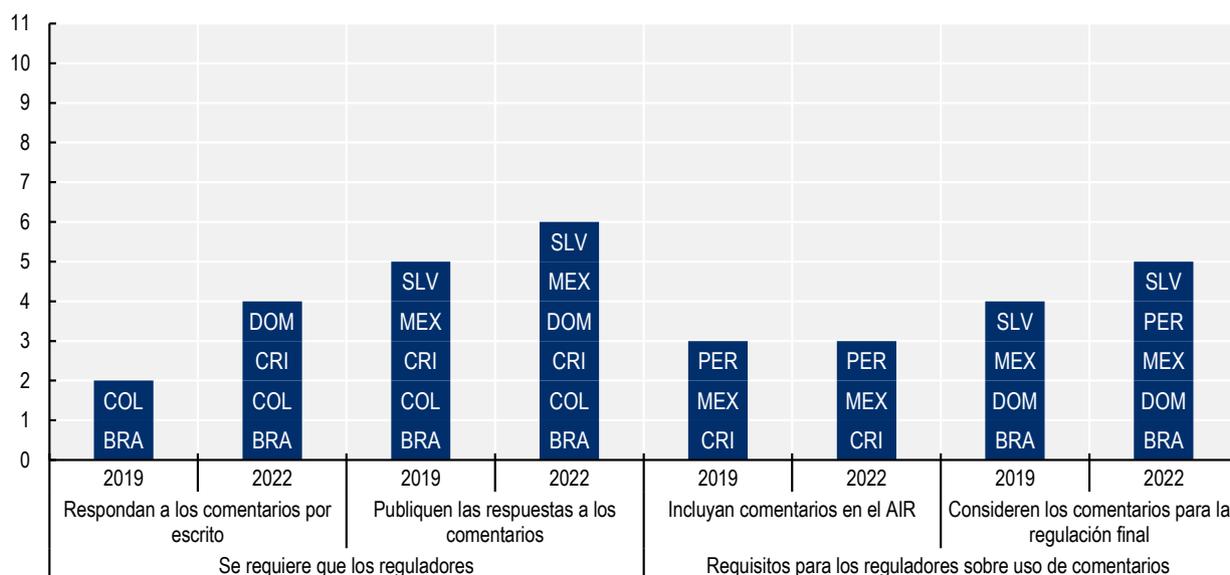
Los gobiernos deben establecer e integrar formas de participación tanto presenciales como en línea, a fin de obtener opiniones que permitan la toma de decisiones informadas que respondan a necesidades diversas. El uso de diferentes formas de participación también podría impulsar la adaptabilidad del gobierno durante períodos críticos de toma de decisiones (OCDE, 2023^[12]). La cultura de la deliberación, en sus diferentes formas, está visiblemente extendida en la mayoría de los países latinoamericanos, donde los ciudadanos muestran un gran interés en involucrarse y muestran capacidad para participar de una forma más estructurada y sistemática. Por ejemplo, la mayoría de los países de ALC realizan reuniones presenciales y consultas focalizadas con grupos de expertos para la elaboración de regulaciones subordinadas (véase el Capítulo 5). Más concretamente, durante la reforma constitucional de Chile, se celebró una consulta paralela en persona con los pueblos originarios a fin de incluir sus opiniones en la nueva constitución. Sin embargo, los países de ALC pueden aprovechar todavía más el uso de prácticas innovadoras de participación pública. Por ejemplo, los procesos deliberativos (por ejemplo, asambleas y paneles de ciudadanos) reúnen a grupos de ciudadanos ampliamente representativos de la sociedad para abordar cuestiones políticas difíciles, como la transición climática (OCDE, 2020^[19]).

La tecnología digital también puede ayudar a los gobiernos a aumentar las oportunidades de participación. Más de dos tercios de los países de ALC encuestados (67%) utilizan portales digitales para facilitar el acceso a la elaboración participativa de políticas, ya sea con portales de todo el gobierno (47%) o de instituciones específicas (20%) (véase el Capítulo 4). Durante la pandemia de COVID-19, varios países de ALC adoptaron o aumentaron el uso de formatos virtuales de participación, en respuesta a las restricciones impuestas por la crisis. Desde entonces, estas herramientas han seguido utilizándose para facilitar las consultas (véase el Capítulo 5). Las tecnologías digitales también pueden aumentar la escala y la velocidad de las consultas, en consonancia con las normas y las prácticas que existen en los países de la OCDE (OCDE, 2023^[12]).

En este contexto, los gobiernos deben proteger las libertades cívicas en la esfera digital. Se trata de una condición previa para que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a información correcta, expresar sus opiniones, y prosperar sin que sus derechos se vean coartados por la discriminación, incitación al odio, desinformación o información falsa, la intrusión arbitraria o ilegal en sus datos personales o amenazas a su privacidad. Los gobiernos deben tener en cuenta estas preocupaciones a la hora de utilizar la tecnología digital para las consultas. Dada la brecha digital en la región, el uso de estas tecnologías debe complementarse con herramientas más tradicionales, y los gobiernos deberán prestar especial atención a la accesibilidad para los grupos infrarrepresentados.

Aunque cada vez más los países de ALC están adoptando prácticas para consultar a las partes interesadas en la elaboración de regulaciones, no siempre exigen que se utilicen los resultados de sus consultas. Los 11 países de ALC encuestados exigen a los responsables del desarrollo de regulaciones la participación de las partes interesadas en la elaboración de todas o de un subgrupo de las regulaciones formuladas por el Poder Ejecutivo (véase el Capítulo 5). Sin embargo, en la actualidad, solo cinco países (Brasil, El Salvador, México, Perú y República Dominicana) exigen a los responsables de las regulaciones que tengan en cuenta la opinión de las partes interesadas al formular la regulación final (Gráfico 1.8). Los países de ALC podrían hacer bastante más para garantizar que las opiniones de las partes interesadas se utilicen sistemáticamente para informar la elaboración de regulaciones, para mejorar el diseño de políticas y regulaciones futuras, y para apoyar una participación significativa de las partes interesadas a lo largo del tiempo.

Gráfico 1.8. Uso de comentarios para la elaboración de regulaciones subordinadas, 2019 y 2022



Fuente: Encuestas OCDE-BID sobre Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) para América Latina y el Caribe 2019 y 2022 (www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm).

StatLink  <https://stat.link/95b2ia>

La participación pública podría ampliarse a varias fases del ciclo de políticas. Los gobiernos también deberían facilitar vías para que los interesados presenten sus aportes durante la implementación de las políticas públicas, permitiéndoles expresar sus ideas o manifestar sus preocupaciones sobre las políticas vigentes. Este tipo de participación puede mejorar la calidad de las normativas existentes al incorporar opinión del mundo real de las personas que están directamente afectadas por ellas. En la región de ALC, los 13 países encuestados cuentan con legislación sobre peticiones u otras formas de iniciativas ciudadanas, mientras que 10 países (77%) tienen disposiciones sobre la gestión de quejas de los ciudadanos en las entidades gubernamentales (véase el Capítulo 4).

1.2.2. Representación y diversidad en la vida pública y en la fuerza laboral

La diversidad y la representación en los órganos de decisión son una preocupación desde hace mucho tiempo en los países de ALC. Los órganos públicos y electos han estado históricamente dominados por hombres y grupos mayoritarios y, a pesar de algunas mejoras en los últimos años, la representación inclusiva está aún lejos de conseguirse (Naranjo Bautista et al., 2022^[20]). La región de ALC precisa una agenda más ambiciosa para la diversidad en el sector público, que vaya más allá del cumplimiento de las leyes y cuotas establecidas, y provoque un cambio cultural más profundo.

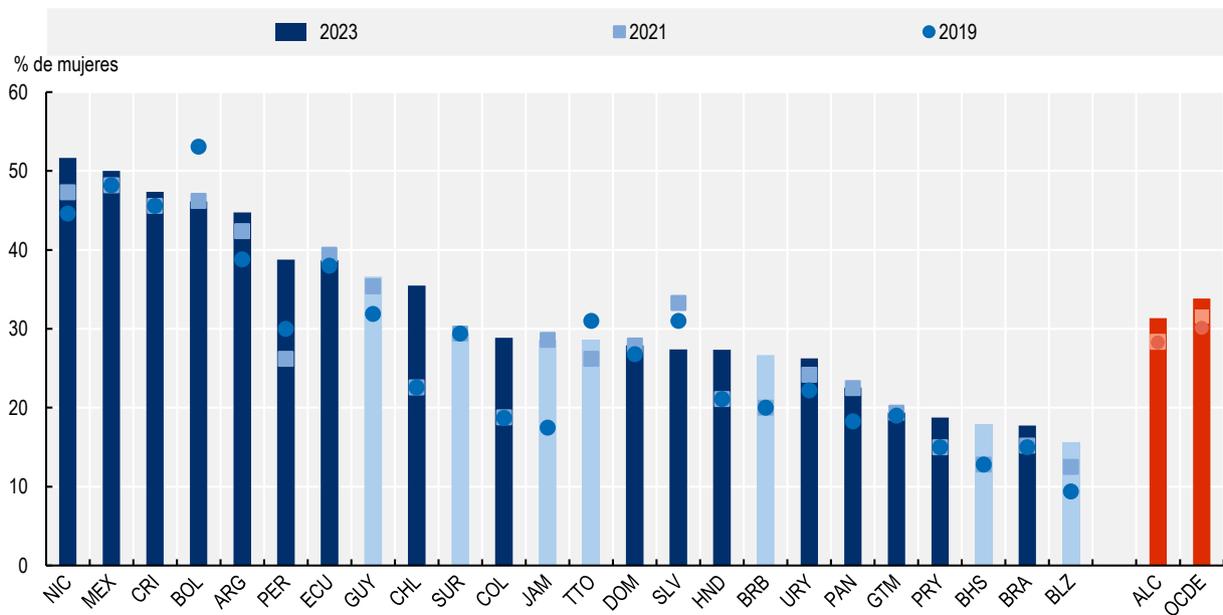
Una mayor ambición por lograr una formulación de políticas inclusiva y representativa ayudaría a superar las profundas brechas que existen en las sociedades de ALC, haciéndolas más resistentes a los choques internos y externos. Los gobiernos reconocen cada vez más la necesidad de reforzar la representación democrática de grupos históricamente poco representados, como los jóvenes, las mujeres y las minorías. Esto se aplica tanto a los órganos de decisión, ya sean elegidos o designados, como a la mano de obra pública que aplica las políticas públicas. Este tipo de representación no solo permite a estos grupos opinar sobre la forma en que se diseñan y aplican las políticas, sino que también da lugar a políticas públicas más adaptables y con mayor rendición de cuentas (OCDE, 2022^[8]).

A pesar de algunos avances, los niveles de representación de las mujeres en la vida política siguen siendo bajos en los países de ALC, y la brecha se reduce a un ritmo lento. Los miembros de los cuerpos legislativos de la región tienen una influencia significativa en las políticas nacionales, ya que son ellos quienes proponen y promulgan la gran mayoría de las leyes primarias. Este amplio alcance tiene un gran impacto, lo que hace que las voces de estos representantes sean fundamentales para dar forma a las políticas. En promedio, 31% de los congresistas de los países de ALC eran mujeres en 2023, en comparación con 28% en 2019, un poco por detrás de los países de la OCDE en 2023 (34%). Solo Chile, Colombia y Perú han reducido la brecha de género de sus cuerpos legislativos en más de 10 p.p. en los últimos cuatro años; en la mayoría de los

países, la brecha solo se redujo marginalmente o se mantuvo igual. Solo en Nicaragua y México las mujeres ocupan el 50% o más de los escaños del Congreso (Gráfico 1.9).

Los bajos niveles de representación política de las mujeres pueden afectar negativamente su participación política y su percepción de la legitimidad de las instituciones públicas, disuadiéndolas aún más de participar en la toma de decisiones. La *Recomendación de la OCDE de 2015 sobre Igualdad de Género en la Vida Pública* insta a los gobiernos a considerar medidas para lograr una representación equilibrada de género en los puestos de toma de decisiones en la vida pública mediante el fomento de una mayor participación de las mujeres en los cuerpos legislativos y en todos los niveles de gobierno (OCDE, 2016^[21]). Políticas como las cuotas de género en las listas electorales han surtido efecto en algunos países. Por ejemplo, en 2015, Chile estableció el requisito de que 40% de los puestos en las listas electorales fueran para mujeres, lo que contribuyó en parte a mejorar la paridad (35%) en el Congreso de 2022. Esto representó un aumento significativo, ya que en el Congreso de 2018 solo el 22.6% de los escaños estaban ocupados por mujeres, además hubo un cambio mucho más rápido que en ciclos electorales anteriores, en los que la proporción de puestos ocupados por mujeres solo había aumentado, en promedio, 1.6 p.p. por ciclo electoral.

Gráfico 1.9. Igualdad de género en los cuerpos legislativos y cuotas electorales de género, 2019, 2021 y 2023



Nota: Las barras en azul claro representan países sin cuotas electorales en sus cuerpos legislativos de cámara baja o única. Metodología: Los datos se refieren a la proporción de mujeres parlamentarias registrada al 1 de febrero de 2023. Los porcentajes representan el número de mujeres legisladoras en relación con el total de escaños ocupados. Fuente: Unión Interparlamentaria (UIP) PARLINE (base de datos).

StatLink  <https://stat.link/u9ilpw>

La diversidad en la edad de los legisladores también puede contribuir a sistemas democráticos más sólidos, garantizando la representación de todos los grupos demográficos de edad. En 2023, solo 27% de los legisladores tenía menos de 40 años de media en los países de ALC, a pesar de que 48% de la población de la región tiene entre 20 y 40 años. Los legisladores más jóvenes aportan las voces y perspectivas de una generación que heredará y moldeará el futuro, y podrían equilibrar los intereses intergeneracionales en la transición verde. La *Recomendación de la OCDE de 2022 sobre la Creación de Mejores Oportunidades para los Jóvenes* aconseja a los países que promuevan la participación de los jóvenes en los procesos cívicos y democráticos y en la toma de decisiones, así como su representación en las instituciones públicas en todos los niveles, incluidos los órganos legislativos y ejecutivos (OCDE, 2022^[22]).

La brecha de género en los puestos de toma de decisiones también es evidente en el sector público. Aunque, en promedio, ha habido igualdad de género en el empleo del sector público desde 2011 en la región de ALC, en 2021 las mujeres seguían estando poco representadas en los niveles altos y medios de dirección, lo que dificulta su participación en las decisiones estratégicas y en la ejecución de los programas públicos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha llevado a cabo una investigación detallada sobre las mujeres en puestos de liderazgo en los países de ALC, la cual ha revelado que las mujeres tienden a ocupar puestos de menor rango dentro de una organización, dato que apunta a barreras estructurales que les impiden llegar a puestos más altos en la jerarquía. A su vez, la investigación sostiene que tanto los "techos de cristal" como los "suelos pegajosos" siguen siendo barreras importantes (Naranjo Bautista et al., 2022^[20]).

La diversidad de la fuerza laboral se extiende también a la inclusión de otros grupos poco representados, como las personas con discapacidad y los pueblos originarios. Algunos países de ALC utilizan herramientas para aumentar la diversidad y la participación de grupos poco representados en los procesos de reclutamiento del sector público. Por ejemplo, 10 de los 15 países encuestados permiten adaptar los procesos de reclutamiento a condiciones médicas o discapacidades, mientras que 6 países utilizan estrategias de comunicación para atraer específicamente a grupos poco representados. Además de estas políticas, 10 de los 15 países de ALC (67%) establecen objetivos o cuotas para incluir a personas con discapacidad en la fuerza laboral pública, y 4 tienen objetivos fijos para los pueblos originarios (Capítulo 13). Sin embargo, es la diversidad real en la fuerza laboral del sector público –no solo las políticas o las cuotas– lo que aporta el beneficio de perspectivas variadas a la hora de aplicar las políticas. Solo Colombia cumple su cuota legal de personas con discapacidad en el sector público (3.6%), establecida entre 0.5% y 4% dependiendo del número de trabajos disponibles en la entidad, mientras que en los países de ALC, en promedio, solo el 1.1% de los empleados de la administración pública eran personas con discapacidad, a pesar de que la cuota legal en la región es en promedio de 4% para este grupo (Capítulo 12).

A menudo faltan datos sobre la aplicación de las políticas de diversidad y las cuotas, lo cual plantea un reto importante. Esto es preocupante en los países de ALC, ya que no suelen recopilar ni hacer públicos los datos sobre el número de personas procedentes de grupos poco representados en sus órganos decisorios ni en su fuerza laboral. La falta de información dificulta la evaluación de la eficacia de estas políticas. Para subsanar esta carencia, los países deben desarrollar, de manera urgente, mecanismos transparentes de información y estrategias exhaustivas de recopilación de datos que abarquen toda la gama de estructuras organizativas, permitiendo así una comprensión más precisa del impacto y el éxito de las iniciativas de diversidad en el sector público.

1.2.3. Formulación de políticas inclusivas

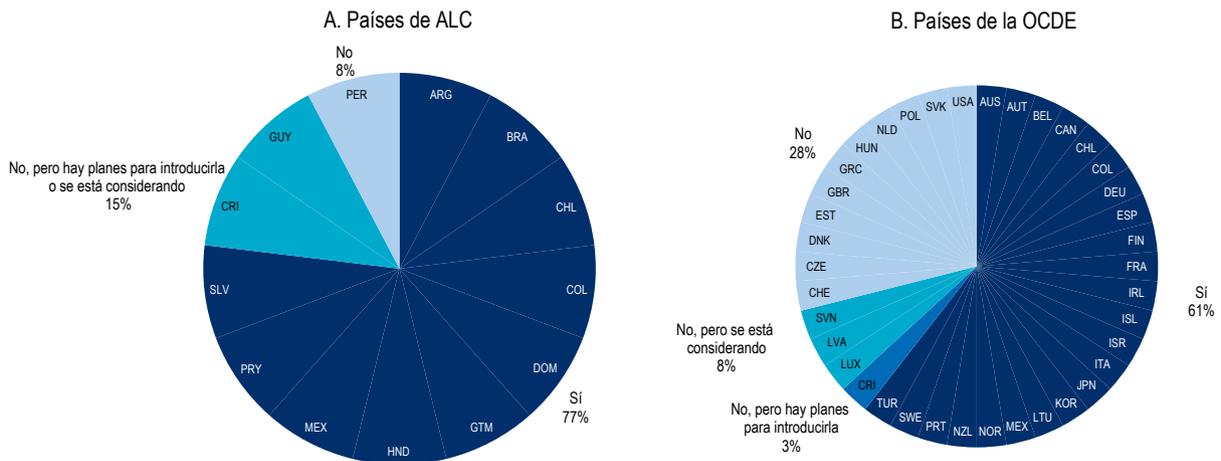
Cada vez más, los países utilizan prácticas para garantizar que la inclusión se tenga en cuenta sistemáticamente en la formulación de políticas. Comprender el impacto de las leyes, regulaciones y políticas en todos los grupos sociales es esencial para promover la equidad y la justicia y generar confianza en las instituciones gubernamentales. Además, las políticas mal diseñadas suelen tener un impacto desproporcionado en los grupos poco representados, como las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas. La desigualdad, las barreras estructurales para determinados grupos y las desventajas históricas pueden entrecruzarse de forma compleja y dinámica exacerbando los efectos adversos de decisiones desacertadas.

Por ejemplo, el sector de infraestructura ha sido tradicionalmente dominado por los hombres, dejando a las mujeres con poca o ninguna voz en las decisiones de inversión que afectan sus oportunidades económicas, su vida cotidiana y su bienestar. Las mujeres y los hombres tienen necesidades distintas y utilizan las infraestructuras de formas diferentes debido a sus roles sociales particulares, su situación económica o sus preferencias. Además, las infraestructuras deficientes suponen amenazas específicas para la seguridad y el bienestar de las mujeres. La cuestión de la escasez de tiempo (por ejemplo, cuando el tiempo dedicado al traslado o al cuidado de personas deja a las personas con menos tiempo para perseguir metas personales y satisfacer sus propias necesidades) es un ejemplo de cómo las infraestructuras pueden tener efectos diferenciados por género, pero también por origen socioeconómico. La escasez de tiempo puede disuadir a las mujeres de incorporarse (o reincorporarse) a la población laboral, llevarlas a aceptar empleos peor pagados o influir en su decisión de ingresar al sector informal, lo que podría permitirles más flexibilidad para atender a los miembros de la familia. Estudios recientes han revelado que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de dejar su trabajo debido a un tiempo largo de traslado. Las conclusiones indican que las mujeres con un trayecto de una hora al trabajo tienen un 29.1% más de probabilidades de dejar su empleo actual que las que tienen un trayecto de 10 minutos, frente a 23.9% más de probabilidades en el caso de los hombres (OCDE, 2021^[23]).

A pesar del potencial del uso de las políticas de infraestructura para abordar la desigualdad de género, de los 15 países de ALC encuestados, solo Costa Rica, México y Perú (20%) informan que han alineado sus visiones estratégicas a largo plazo para las infraestructuras con objetivos de inclusión e integración de la perspectiva de género (véase el Capítulo 8). En comparación, alrededor de un tercio de los países de la OCDE han alineado sus planes de infraestructuras a largo plazo con políticas de integración de la perspectiva de género (OCDE, 2021^[23]).

Las medidas de gasto pueden afectar de forma diferente a los distintos grupos de la sociedad, y cada vez son más los países que tienen en cuenta estos efectos distributivos en sus procesos presupuestarios y de gasto público. El número de países de la OCDE que utiliza la presupuestación con perspectiva de género se ha duplicado entre 2016 y 2022, hasta alcanzar el 61% (OCDE, 2023^[12]), mientras que 77% de los países de ALC declararon utilizarla en 2022 (Gráfico 1.10). En Colombia, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-22 exigía que las autoridades presupuestarias presentaran un informe anual al Congreso Nacional sobre las asignaciones presupuestarias destinadas a garantizar la equidad para las mujeres mediante el seguimiento y la supervisión de cómo se asignan y gastan los fondos (OCDE, 2023^[24]). Sin embargo, hay margen para mejorar la eficacia de la presupuestación con perspectiva de género en la región de ALC. Por ejemplo, se podría hacer un mayor uso de las evaluaciones de impacto de género de las medidas presupuestarias antes de presentarlas. En la actualidad, solo el 20% de los países de ALC que cuentan con presupuestación con perspectiva de género realiza sistemáticamente evaluaciones de impacto de género (véase el Capítulo 6).

Gráfico 1.10. Existencia de presupuestos con perspectiva de género en los países de ALC y la OCDE, 2022



Fuentes: Encuesta BID-OCDE (2022) sobre presupuesto con perspectiva de género; Encuesta OCDE (2022) sobre presupuesto con perspectiva de género.

StatLink <https://stat.link/o1btw4>

1.3. Reforzar las competencias clave para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo

Los gobiernos deben reforzar las competencias clave de la gobernanza pública si quieren hacer frente a la crisis climática. Deben seguir respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y proporcionar ayuda fiable en situaciones de crisis. En esta sección se destacan algunas de estas competencias: garantizar la coherencia estratégica de las políticas; hacer un mayor uso de los datos, la tecnología y las evidencias en la formulación de políticas; crear finanzas públicas más resistentes, y, aún más importante, desarrollar y mantener las competencias adecuadas entre los trabajadores y gestores de los servicios públicos para liderar una transición justa y equitativa hacia una economía más verde.

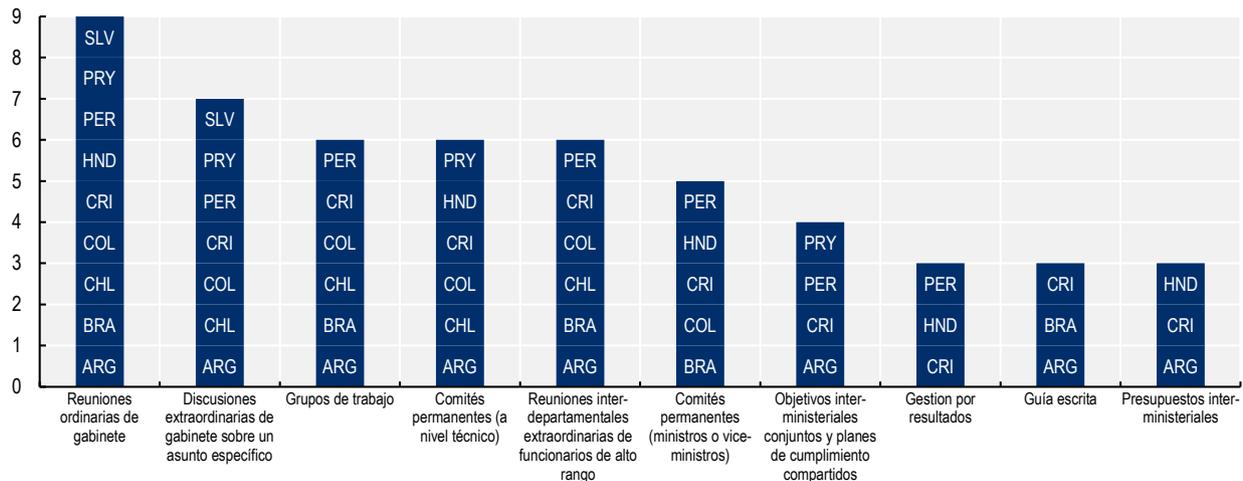
1.3.1. Coherencia y coordinación de las políticas públicas para una transición verde basada en evidencia

Las políticas coordinadas e integradas son cruciales para lograr una transición verde justa en la región de ALC. Los responsables de políticas deben trabajar estratégicamente y alcanzar altos niveles de coordinación entre sectores y niveles de gobierno para garantizar una agenda de gobernanza pública coherente que pueda apoyar la transición. Como señala la *Recomendación de la OCDE sobre la Coherencia de las Políticas en favor del Desarrollo Sostenible* (OCDE, 2019^[25]), el enfoque integrado deberá equilibrar las compensaciones económicas, sociales y medioambientales, aprovechando al mismo tiempo los efectos indirectos de las políticas en distintos ámbitos. La Plataforma Multiactor de Colombia, desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación, es un ejemplo concreto del tipo de herramienta que puede utilizarse para lograr la coherencia política mediante la participación de las partes interesadas. La plataforma reúne las contribuciones de la sociedad civil a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todas las regiones.

La coordinación de las políticas a nivel de todo el gobierno y la coherencia normativa y de políticas son fundamentales porque señalan a las distintas partes interesadas –incluidas las entidades públicas, el mercado y los ciudadanos en general– la necesidad de movilizar recursos para alcanzar los objetivos prioritarios de las políticas públicas. Por ejemplo, una de las funciones clave de los gobiernos es diseñar y aplicar políticas e inversiones para hacer frente a los riesgos medioambientales. Al hacerlo, fijan expectativas y ofrecen orientación para que el sector privado y la sociedad civil se adapten a las nuevas soluciones y resultados ecológicos. Disponer de un marco normativo coherente y de certidumbre sobre las normas y su permanencia a largo plazo es fundamental para que el sector privado participe con éxito en la transición verde. Dado que las iniciativas llevadas a cabo en forma aislada pueden conducir a soluciones insostenibles, los gobiernos deben utilizar enfoques sistémicos con miras a respaldar la coherencia entre los distintos ámbitos políticos y crear consenso en torno a la necesidad de una acción concertada (OCDE, 2022^[15]). Por ejemplo, si las partes interesadas no están alineadas con la necesidad de mitigar las emisiones de carbono, pueden resistirse a las reformas que las obligan a adaptar sus prácticas e invertir en la ecologización de sus operaciones. A la inversa, la adopción generalizada de prácticas verdes no solo sirve de ejemplo para los demás, sino que también ofrece a los consumidores la opción de evitar productos y servicios que no cumplan con sus expectativas. Del mismo modo, las políticas de todo el gobierno en materia de compras públicas y del desarrollo de proyectos de infraestructuras sostenibles podrían contribuir a sentar un ejemplo hacia la transición verde.

En este contexto, el centro de gobierno (CdG) podría desempeñar un papel fundamental a la hora de garantizar que diversos sectores como la energía, el transporte, la agricultura y la protección del medio ambiente adopten un enfoque holístico de la transición verde. La mayoría de los CdG de la región de ALC afirman ser responsables de la coordinación de políticas; sin embargo, el tipo y la profundidad de los mecanismos que utilizan para ello varían ampliamente. Las prácticas más comunes son las reuniones periódicas del gabinete o los debates *ad hoc* del gabinete. Solo unos pocos países (Argentina, Costa Rica, Paraguay y Perú) utilizan mecanismos más avanzados, como objetivos interministeriales conjuntos y planes de ejecución compartidos (Gráfico 1.11). Reforzar la coordinación en cuestiones que afectan a múltiples sectores es clave para abordar un reto político multidimensional a largo plazo como es la transición verde. La pandemia de COVID-19 demostró lo que era posible: en un proceso liderado por el CdG, los países fueron capaces de aunar conocimientos en materia de salud pública y reasignar recursos para abordar cuestiones clave. Esto podría aportar lecciones sobre cómo abordar otras cuestiones apremiantes como el cambio climático.

Gráfico 1.11. Principales mecanismos utilizados por el CdG para coordinar políticas públicas, 2022



Fuente: Encuesta OCDE-BID sobre Centros de Gobierno 2022.

StatLink  <https://stat.link/7vl2ot>

Un enfoque que abarque a todo el gobierno también requiere una mayor atención a estar preparado. La falta de preparación para hacer frente a fenómenos climáticos graves puede agravar su impacto, no solo en el bienestar de la población o en el acceso a los servicios, sino también aumentando el desencanto político, especialmente entre los más vulnerables. En este contexto, los CdG pueden contribuir reforzando la planificación estratégica para apoyar la transición verde. Aunque los CdG de cinco de los nueve países de ALC estudiados son responsables de las evaluaciones nacionales de riesgos y de la planificación de escenarios, podría hacerse más para garantizar que se incorporen en las estrategias a largo plazo. En la región de ALC no se utilizan habitualmente herramientas como los tableros de seguimiento para supervisar la aplicación de las prioridades políticas o apoyo particular a los ministerios que ejecutan (véase el Capítulo 3).

1.3.2. Aprovechar la generación de datos para la elaboración de políticas basadas en evidencia

El ritmo rápido de cambio del mundo actual exige actualizaciones y ajustes constantes de las decisiones de políticas, por lo que resulta imperativo mantener los datos actualizados y relevantes. En una era de desafíos cada vez más complejos, que van desde las catástrofes naturales a las pandemias mundiales, la capacidad de recopilar, analizar y actuar a partir de datos relevantes resulta fundamental. Los datos son vitales para elaborar estrategias eficaces que permitan afrontar los retos sociales e impulsar cambios positivos. Este enfoque permite a los gobiernos y organizaciones anticiparse a posibles crisis, asignar recursos de forma eficiente, adaptar las intervenciones a la realidad y propiciar un futuro más adaptable y seguro para todos.

Los datos confiables y los sistemas de información conectados e integrados son la piedra angular de una cultura más amplia de formulación e implementación de políticas basadas en evidencia. Sin embargo, la gobernanza de los datos sigue siendo un reto para muchos gobiernos. Entre los nueve países encuestados de la región de ALC, por ejemplo, solo Argentina, Chile y Perú otorgan a sus CdG la responsabilidad exclusiva de la gobernanza de los datos, mientras que en Colombia la responsabilidad se comparte con otro organismo (véase el Capítulo 3). La gestión de los datos durante la pandemia de COVID-19 demostró que queda margen para que los CdG refuercen su papel en las funciones de gobernanza y supervisión de datos (véase el Recuadro 1.2).

Recuadro 1.2. Monitoreo en tiempo real durante la pandemia de COVID-19

Al inicio de la crisis de la COVID-19, la mayoría de los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe (ALC) establecieron algún tipo de tablero de control de desempeño y actualizaciones regulares (a menudo diarias) para informar los procesos de toma de decisiones de los líderes gubernamentales. En diferentes países y en diferentes momentos de la pandemia, estos tableros de mando normalmente incluían una combinación de indicadores de insumos (por ejemplo, disponibilidad de ventiladores, equipos de protección); indicadores de proceso (por ejemplo, número de pruebas PCR aplicadas, vacunas distribuidas); indicadores de producto (por ejemplo, tasas de ocupación de camas, tasas de ocupación de cuidados intensivos, tasas de vacunación), e indicadores de resultados (por ejemplo, número de casos, tasas de positividad, número de muertes). También podrían incluir otros indicadores principales de diferentes sectores (por ejemplo, tasas de movilidad del tráfico y cargas virales en aguas residuales que podrían predecir cambios posteriores en los demás indicadores) y sobre otros ámbitos políticos relevantes, como la actividad económica o el empleo. Entre ellos se incluía el uso de predicciones en tiempo real mediante herramientas de *nowcasting* para captar las rápidas variaciones producidas por la pandemia y las decisiones de políticas públicas.

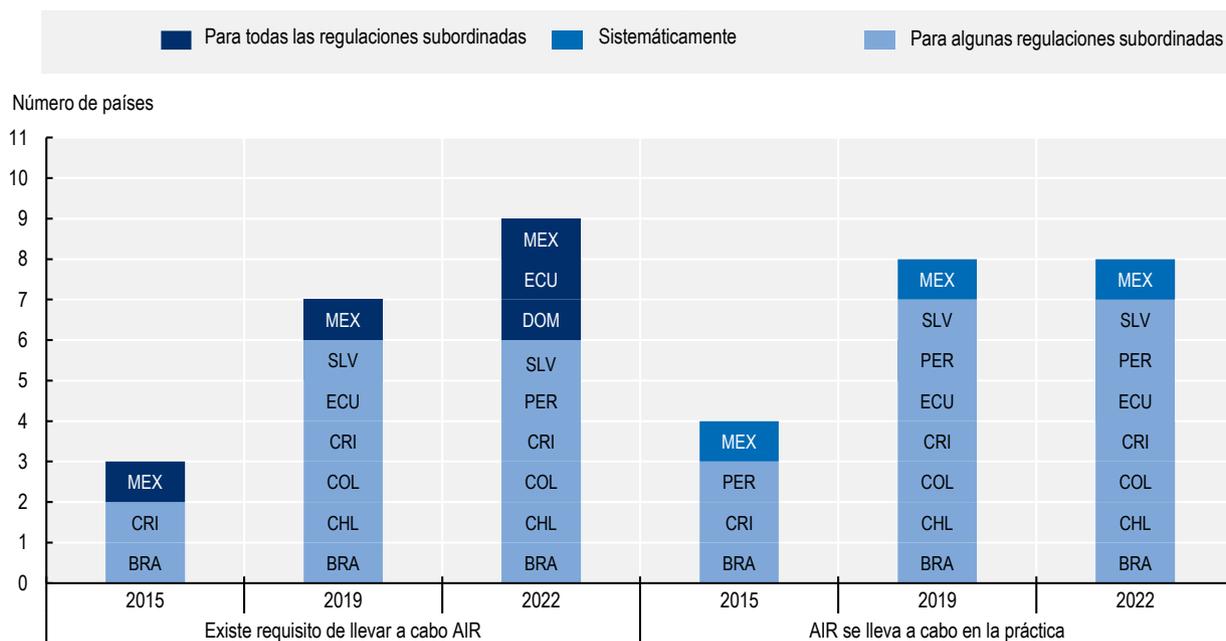
Si bien esto ciertamente representó un avance en la utilización de datos para fundamentar decisiones políticas, la pandemia también puso al descubierto algunas de las dificultades que presenta el uso de sistemas de información existentes para suministrar adecuadamente a las autoridades información en tiempo real proveniente de procesos automatizados:

- Falta de marcos de gobernanza y de la infraestructura tecnológica necesaria para incorporar diferentes tipos de datos de salud.
- Diferencias en las definiciones, metodologías o plataformas que dificultan la interoperabilidad entre fuentes de datos.
- Cobertura insuficiente de registros electrónicos de salud personales.
- Falta de regulación sobre confidencialidad.
- Falta de capacidades para analizar datos.

Fuente: Adaptado de Shostak, Alessandro, Diamond *et al.* (2023): "El centro de gobierno: nuevas perspectivas tras una década de reformas". Banco Interamericano de Desarrollo.

Las regulaciones bien diseñadas y fundamentadas en evidencia, que aprovechan los datos ya existentes, pueden nivelar el campo de juego, fomentar la innovación y proteger a grupos vulnerables, contribuyendo a un entorno económico estable y sostenible. Los análisis de impacto regulatorio (AIR) tienen como meta utilizar evidencia y datos para identificar claramente los objetivos de la política pública, analizar diferentes alternativas para abordar problemas y determinar la manera más efectiva y eficiente de lograr los objetivos. Todos los países de la OCDE ya han adoptado alguna forma de AIR. Aunque este enfoque está ganando aceptación en los países de ALC en cuanto al desarrollo de regulaciones iniciadas por el Poder Ejecutivo, en la práctica, no muchos países lo utilizan de manera sistemática (Gráfico 1.12). Lograr coherencia en las políticas de sostenibilidad debe ser un esfuerzo horizontal para las administraciones; los formuladores de políticas deben incorporar consideraciones ambientales, como el clima y la biodiversidad, en sus AIR (OCDE, 2023^[26]). Cada vez más, los países de la OCDE están exigiendo formalmente a los responsables de formular políticas que tengan en cuenta los impactos ambientales de las regulaciones (OCDE, 2021^[27]). En la región de ALC, Chile y México requieren formalmente que los responsables de formular políticas consideren el impacto ambiental y de sostenibilidad de las diferentes opciones regulatorias. Sin embargo, tanto en los países de ALC como en los de la OCDE, la inclusión de estas consideraciones aún no es una práctica generalizada o sistemática (OCDE, 2023^[26]).

Gráfico 1.12. Obligación legal de realizar AIR y AIR realizados en la práctica para elaborar regulaciones subordinadas, 2015, 2019 y 2022



Fuentes: Encuestas OCDE-BID sobre Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) para América Latina y el Caribe 2022; iREG OCDE 2020 (www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm).

StatLink  <https://stat.link/ylo65z>

1.3.3. Finanzas públicas resilientes

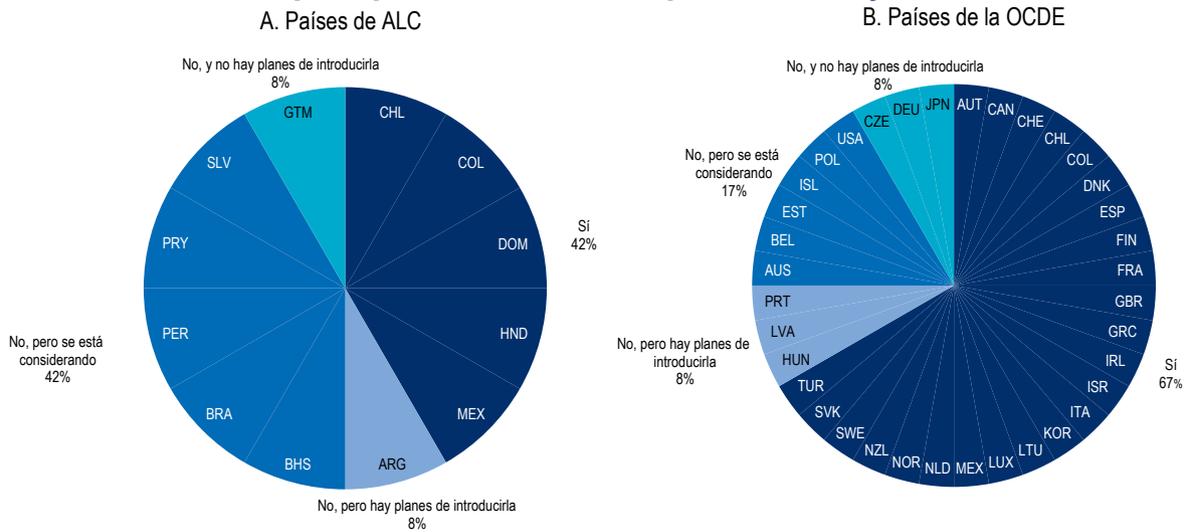
Los gobiernos necesitan marcos creíbles de gestión financiera pública si quieren generar confianza en su gobernanza presupuestaria y mantener suficiente margen fiscal para poder invertir en prioridades de políticas públicas y financiar respuestas a crisis cuando sea necesario. Después de la severa recesión económica causada por la pandemia de COVID-19 en 2020, los países de ALC experimentaron una sólida recuperación en 2021. Sin embargo, esta se desaceleró en 2022 debido a la adversa situación económica global, la reversión de paquetes de estímulo fiscal y monetario, proyecciones débiles de crecimiento y presiones inflacionarias que llevaron a aumentos en las tasas de interés por parte de los bancos centrales (OCDE et al., 2022^[21]). El panorama de crecimiento económico en la región sigue siendo bajo (Beylis et al., 2023^[28]), lo que puede significar dificultades para que los gobiernos mejoren las condiciones sociales, refuercen sus posiciones fiscales y promuevan un crecimiento inclusivo a largo plazo (Galindo y Nuguer (2023^[29])).

Como en otros lugares, la pandemia de COVID-19 puso a prueba la flexibilidad de los marcos fiscales en la región de ALC. Los países de ALC se unieron a muchos países de la OCDE al recurrir al uso de fondos de contingencia y extrapresupuestarios, presupuestos suplementarios y otras medidas, incluidos préstamos y reajustes de recursos. Las respuestas a la pandemia dentro de la región no fueron homogéneas y estuvieron influenciadas por diferentes realidades institucionales y por las herramientas disponibles (véase el Capítulo 6). Sin embargo, en la mayoría de los casos, la emisión de nueva deuda formó parte de la combinación, aumentando sustancialmente los niveles de deuda de la región de 46.0% del PIB en 2013 a 66.3% del PIB en 2022 (véase el Capítulo 10).

Las reglas fiscales son una de las herramientas más comunes que utilizan los países para garantizar la disciplina fiscal, al mismo tiempo que dejan margen para abordar circunstancias imprevistas. Doce países de ALC cuentan con reglas fiscales, siendo las más comunes las relacionadas con el equilibrio fiscal y la deuda (Cardenas et al., 2021^[30]). En estos países, las reacciones fiscales a la pandemia de COVID-19 fueron ampliamente consistentes con sus marcos de responsabilidad fiscal. La mayoría de los países recurrieron a cláusulas de escape existentes o realizaron ajustes incorporados para factores cíclicos. Sin embargo, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron temporalmente sus reglas fiscales, mientras que Chile y México revisaron sus objetivos fiscales para el año 2020 (FMI, 2020^[31]).

En un contexto de aumento sustancial de los niveles de deuda, que dejan un margen de maniobra fiscal limitado, los gobiernos podrían hacer un uso más efectivo de los procesos de presupuestación y gestión financiera pública para abordar la crisis climática (véase el Capítulo 10). Solo 5 de los 12 países de la región de ALC encuestados (Chile, Colombia, Honduras, México y República Dominicana) utilizan mecanismos de presupuestación verde (42%), en comparación con 67% de los países de la OCDE; otros 5 países están considerando su uso (Gráfico 1.13). Los países de ALC que utilizan la presupuestación verde han establecido el entorno propicio y disposiciones institucionales necesarias. Sin embargo, queda margen para mejorar la adopción de herramientas y métodos de presupuestación verde, y para aumentar la responsabilidad y transparencia involucrando también a la sociedad civil en su monitoreo (véase el Capítulo 6). La mayoría de los países de la OCDE que aplican la presupuestación verde han adoptado medidas de transparencia y rendición de cuentas a fin de guiar a las instituciones públicas en la consecución de objetivos verdes. Por ejemplo, Francia e Italia preparan declaraciones de presupuesto verde como parte de cada presupuesto gubernamental para demostrar cómo se ajusta a sus objetivos verdes (OCDE, 2022^[15]).

Gráfico 1.13. Existencia de presupuestación verde en países de ALC y de la OCDE, 2022



Fuentes: OCDE-BID (2022), Encuesta sobre Presupuestación Verde; OCDE (2022), Encuesta de la OCDE sobre Presupuestación Verde.

StatLink  <https://stat.link/25gfup>

Además de ampliar el uso de mecanismos de presupuesto verde en la región de ALC, los países también deben prestar atención a aumentar su efectividad. Los gobiernos deben adoptar metodologías para evaluar los efectos ambientales y utilizar marcos presupuestarios plurianuales modernos vinculados a la planificación estratégica, con vistas a garantizar que se proporcionen recursos, tiempo y experiencia suficientes, así como a asegurar que haya respaldo político para la implementación de este tipo de herramientas (OCDE, 2022^[15]).

Los gobiernos también podrían fortalecer la resiliencia de sus finanzas públicas ante eventos climáticos importantes y severos. En 2022, se estima que los desastres naturales –muchos de ellos impulsados por el cambio climático– causaron pérdidas económicas de USD 313 000 millones a nivel mundial (AON, 2023^[32]). Los marcos presupuestarios para emergencias deben permitir la rápida reasignación de fondos a fin de cubrir necesidades inmediatas posteriores al desastre. Por ejemplo, Colombia tiene estrategias financieras que utilizan la reasignación presupuestaria como una herramienta para financiar componentes fundamentales de un sistema o red (riesgos de capas inferiores) y para satisfacer las necesidades en el período posterior a un desastre relacionado con el clima.

1.3.4. Planificación y ejecución de infraestructuras públicas resilientes

La gobernanza de la infraestructura desempeña un papel crítico en la lucha contra la crisis climática y garantiza la continuidad del servicio ante impactos climáticos y otros choques. Los activos y operaciones de infraestructura estarán cada vez más expuestos a los efectos del cambio climático, afectando directamente la prestación de servicios públicos. Diferentes estudios atribuyen entre el 50% y el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la infraestructura (OCDE/Banco Mundial/ONU Medio ambiente, 2018^[33]). El desarrollo de infraestructuras confiables, sostenibles y resilientes requerirá la reorganización de procesos de planificación y ejecución de infraestructura.

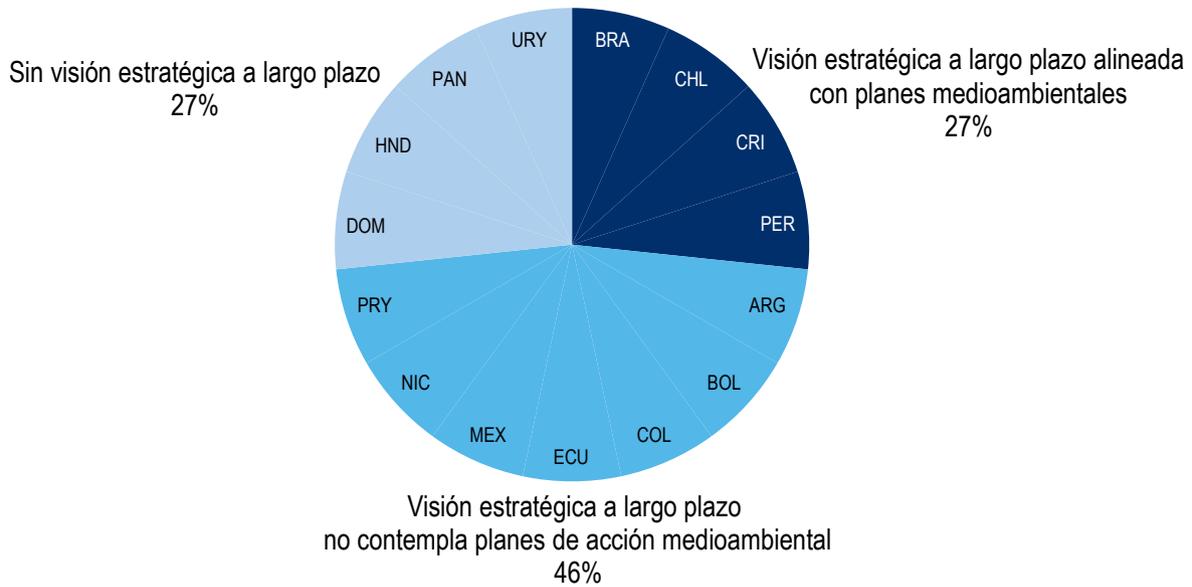
De los 15 países de ALC encuestados, solo Brasil (Recuadro 1.3), Chile, Costa Rica y Perú (27%) alinean explícitamente su visión estratégica de infraestructura a largo plazo con sus planes ambientales o de acción climática (Gráfico 1.14). En contraste, 73% de los países de la OCDE alinean sus planes de infraestructura a largo plazo con políticas ambientales y de acción climática (OCDE, 2022^[15]).

Recuadro 1.3. Alineamiento de la visión estratégica de infraestructura con objetivos verdes en Brasil

El Ministro de Economía de Brasil ha estado trabajando para integrar objetivos verdes en su plan de infraestructura a largo plazo. Por ejemplo, el plan de infraestructura incorpora iniciativas para conservar y restaurar los hábitats naturales. Esto implica medidas para proteger bosques, ríos y biodiversidad, reconociendo su importancia en la mitigación del cambio climático y el mantenimiento del equilibrio ecológico. También integra la resiliencia y adaptación en el diseño de proyectos mediante medidas para resistir desastres naturales como inundaciones y tormentas, e incluye el uso de infraestructuras verdes como pavimentos permeables y techos verdes. Finalmente, las provisiones económicas generadas por el Ministerio y transferidas a los sectores para sus planes sectoriales tienen en cuenta normas contra la deforestación y el impacto del cambio climático en la productividad agrícola.

Fuente: Información recopilada a través de la Encuesta de Gobernanza de Infraestructuras de la OCDE.

Gráfico 1.14. Alineamiento de una visión estratégica de infraestructura a largo plazo con la sostenibilidad, 2022



Fuente: Encuesta de Gobernanza de Infraestructuras de la OCDE-BID 2022.

StatLink <https://stat.link/a6t1db>

Los países de ALC podrían hacer más para aprovechar la transición hacia una infraestructura más sostenible y fortalecer sus compromisos con metas climáticas a largo plazo, estándares internacionales y otros objetivos ambientales. A pesar de que más países de la región están utilizando herramientas para evaluar las consideraciones ambientales de los proyectos de infraestructura, aún hay desafíos (CEPAL, 2023^[34]). Dentro de los desafíos de la región se incluyen establecer criterios ambientales para seleccionar proyectos de infraestructura; llevar a cabo, operar, mantener, modernizar y retirar activos de infraestructura de manera que se reduzcan las emisiones de carbono y la huella ambiental, e influir en el comportamiento para optar por alternativas sostenibles (OCDE, 2022^[15]). Por ejemplo, de los 32 países de la OCDE encuestados, 22 (69%) tienen metas relacionadas con la inversión en proyectos de infraestructura clave para promover la sostenibilidad, y 19 (59%) buscan sinergias transversales entre sectores para evitar la duplicación y minimizar los impactos ambientales negativos (OCDE, 2023^[35]). Estados Unidos, por ejemplo, tomó diversas medidas para garantizar que los recursos asignados en virtud de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo se apliquen de manera consistente con las prioridades medioambientales (véase el Recuadro 1.4).

Recuadro 1.4. Orientar la inversión en infraestructura para garantizar la coherencia con los objetivos de sostenibilidad en Estados Unidos

Estados Unidos ha tomado varias medidas para garantizar que los USD 1,2 billones aprobados en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo se implementen de manera efectiva y cumplan con los objetivos de sostenibilidad:

- **Mecanismos de dirección:** Una orden ejecutiva estableció seis prioridades de implementación, incluidas infraestructuras que sean resistentes al clima y que ayuden a abordar la crisis climática. Un Grupo de Trabajo de Implementación de Infraestructuras establecido por orden ejecutiva y liderado por el recién nombrado coordinador de Implementación de Infraestructuras de la Casa Blanca ofrece orientación desde el CdG junto a los jefes de seis agencias federales.
- **Fortalecimiento de la alineación de proyectos:** Dado que la mayor parte de la inversión en infraestructura se implementa a nivel de los estados, en todos ellos se han designado coordinadores de infraestructuras para colaborar con el Grupo de Trabajo.
- **Desarrollo de capacidades:** El esfuerzo fortalecido de implementación ha dado como resultado directrices producidas por la Oficina de Presupuesto y Gestión (OMB, por sus siglas en inglés) para ministerios y agencias. El gobierno federal está efectuando contrataciones para cubrir más de 8 000 puestos esenciales enfocados en la misión de implementar la ley, incluidos ingenieros y científicos para combatir el cambio climático.

Fuente: OCDE (2022), "Gobernanza de infraestructuras para infraestructuras verdes y resilientes al clima", informe discutido durante la reunión de septiembre de 2022 del Grupo de Trabajo de los Principales Expertos en Contratación Pública (LPP, por sus siglas en inglés).

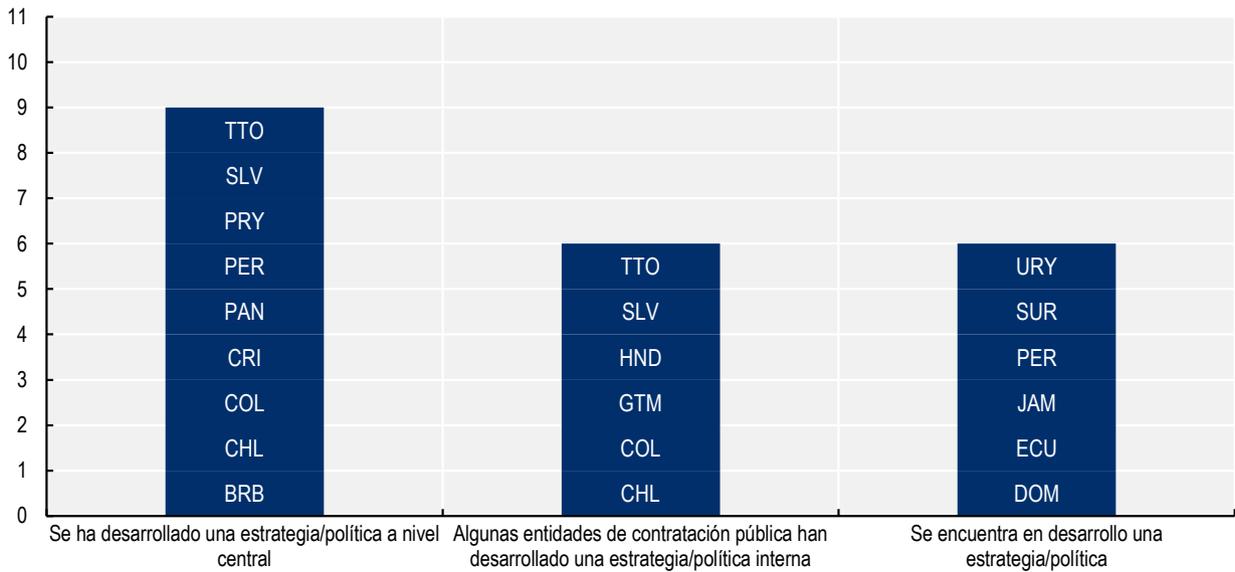
1.3.5. Utilizar prácticas de contratación pública para promover la sostenibilidad

Las contrataciones públicas en la región de ALC representaron 6.6% del PIB y 17,4% del gasto gubernamental en 2021. El volumen de gasto significa que los gobiernos pueden aprovechar las contrataciones públicas estratégicas para incentivar a entidades y proveedores a promover prácticas de producción y cadenas de suministro sostenibles.

Algunos países de ALC utilizan la contratación pública verde (CPV) (es decir, la compra pública de productos y servicios que son menos perjudiciales para el medio ambiente cuando se tiene en cuenta todo su ciclo de vida) para alcanzar objetivos de políticas públicas en el área de protección ambiental. De los 19 países de la región encuestados, 9 (47%) tienen estrategias o políticas de CPV implementadas a nivel central (Gráfico 1.15). En contraste, entre los países de la OCDE, los 32 países encuestados tienen un marco activo de CPV (OCDE, 2023^[12]). Sin embargo, contar con una política o estrategia de CPV no basta para garantizar que las consideraciones ambientales estén incorporadas en la contratación pública. De los 19 países de ALC encuestados, solo la autoridad central de adquisiciones de Panamá integra la CPV como un criterio permanente de adjudicación (véase el Capítulo 7).

Un desafío común en la implementación de la CPV es que corre el riesgo de sobrecargar la contratación pública con objetivos de políticas además de su objetivo principal de lograr una buena relación precio-calidad. Una manera de priorizar el uso de esos objetivos es entender la importancia de la contribución potencial y real por parte de la contratación pública para alcanzar ese objetivo (ya sea económico, social o ambiental). Otros desafíos incluyen la percepción de que los productos y servicios verdes pueden ser más costosos que los convencionales; la falta de conocimiento técnico entre los funcionarios de contrataciones sobre la integración de normas ambientales en el proceso de adquisición; y la ausencia de mecanismos de monitoreo para evaluar si la CPV ha logrado sus objetivos declarados (OCDE, 2015^[36]).

Gráfico 1.15. Contratación pública estratégica para alcanzar objetivos verdes, 2022



Fuente: BID-OCDE (2022), Encuesta sobre la Implementación de la Recomendación de la OCDE de 2015 sobre Contratación Pública.

StatLink <https://stat.link/mktnb7>

1.3.6. Habilidades y gestión en el servicio público

Los funcionarios públicos competentes son la columna vertebral de una gobernanza efectiva, ya que son responsables de diseñar las políticas y traducirlas en acciones tangibles que impulsen el progreso social. Sus roles abarcan desde la formulación de políticas hasta la prestación de servicios, y su efectividad influye en gran medida en los resultados de las iniciativas públicas. Nunca se podrá exagerar la importancia estratégica de la profesionalización de la función pública, los procesos de selección competitivos y el aprendizaje y la capacitación continuos para garantizar que los esfuerzos de los funcionarios públicos se orienten hacia la inclusión y la sostenibilidad. Las capacidades de los funcionarios públicos de alto nivel son particularmente importantes para guiar a las organizaciones del sector público en medio de la incertidumbre, transformar las administraciones públicas en la dirección correcta y entregar valor a los ciudadanos (OCDE, 2023^[37]).

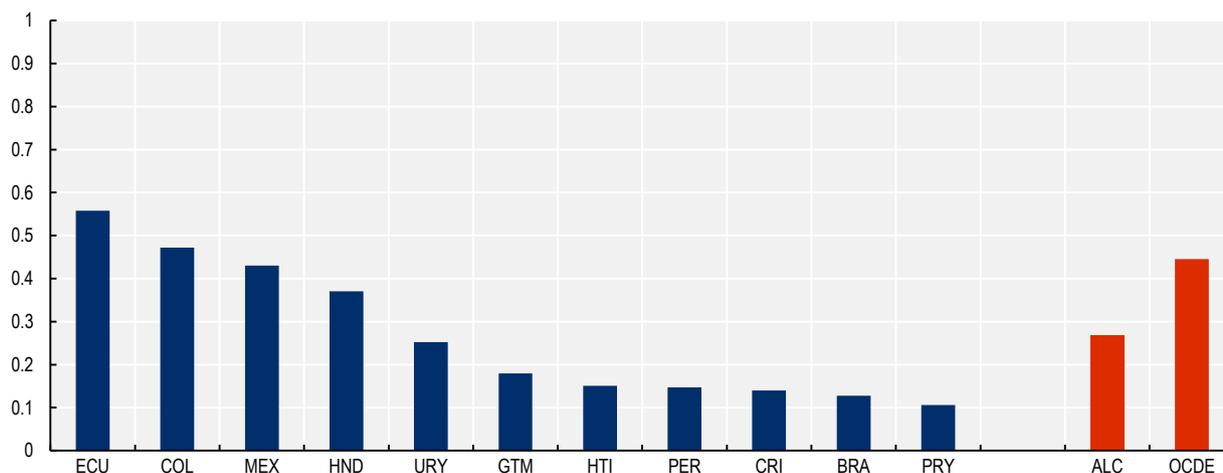
El empleo en el sector público representó un promedio de 11.6% del empleo total en la región de ALC en 2022, en comparación con 20.8% en promedio en los países de la OCDE (véase el Capítulo 12). Los sistemas de empleo público en la región siguen estando fuertemente basados en la carrera, y se caracterizan por la selección competitiva para ingresar a la función pública y carreras profesionales extendidas. Los cargos de alto nivel de la administración pública a menudo solo pueden ser ocupados por funcionarios públicos existentes. Si bien este tipo de sistema contribuye al desarrollo de un servicio público profesional, independiente y basado en el mérito, también puede limitar la capacidad de las administraciones para adaptarse a circunstancias cambiantes y atraer o retener diferentes habilidades y competencias. En los últimos años, varios países, incluidos Brasil, Chile y Colombia, han intentado hacer que su servicio público sea más flexible y prospectivo. Por ejemplo, Brasil ha llevado a cabo iniciativas para promover la movilidad dentro de las carreras con el fin de fortalecer la profesionalización del servicio público y el desarrollo de capacidades (OCDE, 2023^[37]). Sin embargo, el empleo público de la región aún queda rezagado frente a los países de la OCDE en cuanto al desarrollo de un servicio público con la autonomía, profesionalismo y capacidad necesarios para mejorar la eficiencia y la innovación del sector público, así como para aumentar la efectividad de las políticas (Salazar-Morales y Lauriano (2021^[38])). En la región también podrían fortalecerse la selección y promoción basadas en el mérito para los niveles más altos del servicio público (Gerson, 2020^[39]).

Formar un grupo diverso de funcionarios públicos calificados que estén alineados con los objetivos sostenibles e inclusivos de sus gobiernos implica atraer y retener profesionales con las habilidades adecuadas. También implica posicionar al servicio público como un empleador de preferencia, elaborar las políticas de empleo en función de lo que atrae y retiene a los empleados capacitados, ofrecer una remuneración adecuada y un salario equitativo, y buscar activamente atraer a grupos y conjuntos de habilidades subrepresentados (OCDE, 2019^[40]). La OCDE ha desarrollado un indicador compuesto sobre el uso de prácticas proactivas de contratación para atraer a los candidatos con las habilidades que se necesiten. El índice mide, entre

otras cosas, el uso de herramientas para atraer a candidatos talentosos, incluida la implementación de estrategias de comunicación a través de canales diferentes. Según este índice, hay un gran margen para que los países de ALC mejoren su uso de técnicas de contratación en el servicio público (Gráfico 1.16). Por ejemplo, podrían fortalecer el uso de campañas de contratación focalizadas, ampliar el uso de cazatalentos o acelerar los procesos de contratación para aquellos con habilidades muy demandadas (véase el Capítulo 13).

Gráfico 1.16. Índice sobre el uso de prácticas proactivas de contratación, 2022

Puntuación de 0 (mínimo) a 1 (máximo)



Nota: El promedio para la OCDE es de 2020 y no de 2022. El índice compuesto toma en cuenta los siguientes aspectos de la contratación proactiva: i) beneficios destacados en el material de contratación; ii) políticas para atraer a más y mejores candidatos con habilidades demandadas; iii) el uso de métodos para determinar qué atrae a los empleados capacitados; iv) sistemas de remuneración adecuados para atraer buenos candidatos, y v) el uso de acciones para mejorar la representación de grupos subrepresentados.

Fuentes: OCDE-BID (2022), Encuesta sobre Liderazgo y Capacidad del Servicio Público; OCDE (2020), Encuesta sobre Liderazgo y Capacidad del Servicio Público.

StatLink  <https://stat.link/gs6own>

Además de fortalecer sus prácticas de contratación, los países necesitan apoyar una cultura de aprendizaje en el servicio público con miras a desarrollar las habilidades necesarias para mantenerse al día con la naturaleza cambiante del mundo laboral. Por ejemplo, 13 de los 14 países de ALC (93%) informan que imparten capacitación a sus funcionarios públicos sobre acceso a la información y 9 ofrecen capacitación sobre la participación de las partes interesadas (64%). Sin embargo, solo en 5 de los 19 países (Chile, Colombia, Haití, Panamá y Trinidad y Tobago) la capacitación es obligatoria para los funcionarios de contrataciones públicas, como parte de los esfuerzos para garantizar que cuenten con las competencias adecuadas (véase el Capítulo 7).

Los funcionarios públicos de alto nivel son una categoría especial de servidores públicos, ya que desempeñan un papel importante en la interfaz entre el nivel político y las operaciones profesionales en las administraciones públicas. Sin embargo, la mayoría de los países de ALC no utilizan un marco específico para los cargos de alta dirección pública, y 14 de los 15 países encuestados no identifican posibles altos directivos ni fomentan la movilidad profesional (véase el Capítulo 13). Avanzar en el desarrollo de esos marcos permitiría a las administraciones identificar altos funcionarios públicos potenciales y desarrollar sus capacidades de liderazgo, así como las de los funcionarios públicos de alto nivel en funciones. Esto ayudaría a prepararlos para respaldar agendas políticas rápidas, gestionar y transformar vastas organizaciones públicas, motivar e inspirar a sus equipos de trabajo y rendir cuentas por los resultados.

El desarrollo de competencias profesionales y de liderazgo también está vinculado a la necesidad de profesionalizar el servicio público y de mantener su relevancia ante desafíos en constante evolución. En áreas específicas del sector público, los gobiernos están haciendo esfuerzos para profesionalizar el servicio público, como es el caso de la contratación pública. La contratación pública es reconocida como una profesión en 13 (39%) de los 33 países de la OCDE, pero solo en 2 de los 19 países de ALC, Paraguay y Trinidad y Tobago (10%) (véase el Capítulo 7).

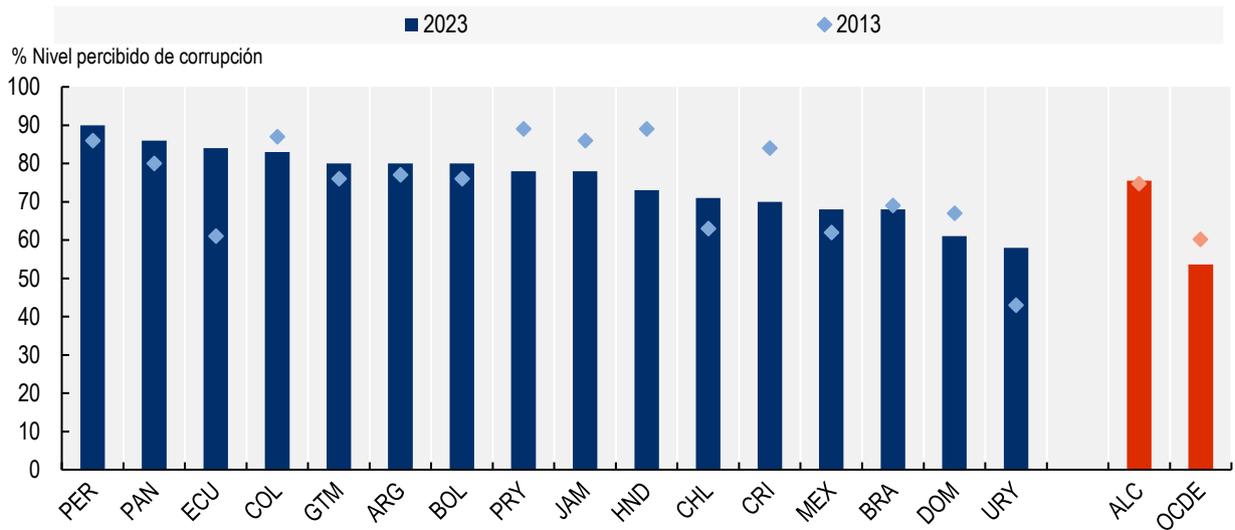
1.4. Proteger contra los riesgos de corrupción y falta de integridad

Mantener normas efectivas de integridad pública para reducir el riesgo de corrupción, así como la influencia indebida y captura de políticas –combinadas con una rendición de cuenta y supervisión sólidas– es fundamental para el bienestar sostenible y la gobernanza democrática. En tiempos de crisis, resulta especialmente importante que los sistemas democráticos se protejan contra los peligros planteados por la corrupción y la falta de integridad, que pueden socavar la confianza del público en las instituciones gubernamentales (OCDE, 2023^[12]) y profundizar las amenazas a la cohesión social. En 2023, 72% de las personas en ALC creían que unos cuantos grupos poderosos gobernaban sus países en beneficio propio (Latinobarómetro, 2023^[41]). Esta sección presenta las acciones clave que los gobiernos deben llevar a cabo para promover la integridad y la transparencia, así como para la supervisión efectiva necesaria para la rendición de cuentas del sector público.

1.4.1. Integridad y lucha contra la corrupción

La corrupción es un obstáculo principal para la buena gobernanza pública. Debilita la eficiencia del gobierno al influir en las decisiones de los actores públicos y privados. La percepción pública de corrupción sigue siendo alta en la región de ALC. En 2023, el 75.5% de los encuestados de la región de ALC consideró que la corrupción estaba muy extendida en el gobierno de su país, en comparación con el 53.6%, en promedio, entre los países de la OCDE, según la encuesta Gallup (Gráfico 1.17).

Gráfico 1.17. Percepción de corrupción en países de ALC y de la OCDE, 2013 y 2023



Nota: El nivel de corrupción percibido es calculado por la Encuesta Mundial Gallup. Se muestra la proporción de encuestados que responden afirmativamente a la pregunta: "¿Está la corrupción generalizada en el gobierno de este país, o no?".

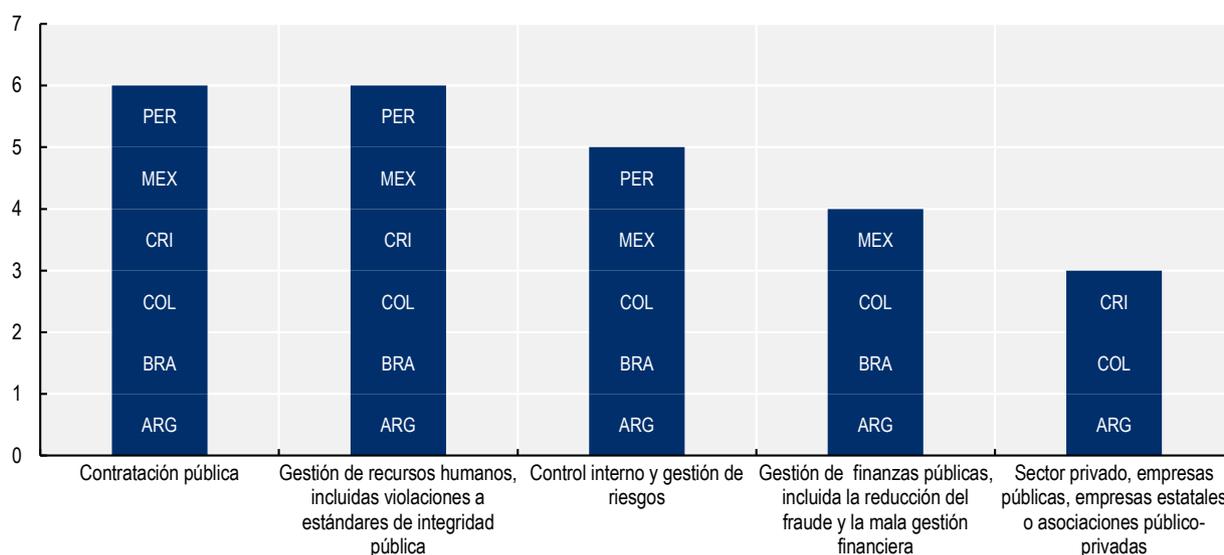
Fuente: Base de datos de la Encuesta Mundial Gallup 2023.

StatLink  <https://stat.link/19vjo5>

La integridad pública juega un papel clave en la mejora de la productividad, la reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de las capacidades del sector público (OCDE, 2018^[42]). Para protegerse contra la corrupción y promover la integridad, los gobiernos deben contar con políticas que garanticen la rendición de cuentas en los procesos de toma de decisiones, promuevan la transparencia en las finanzas políticas y los procesos electorales, reduzcan los conflictos de interés de los funcionarios públicos y mantengan procedimientos de cabildeo claros y justos. Resulta especialmente importante que las instituciones públicas responsables de la gobernanza verde cumplan con estándares de integridad y transparencia, no solo porque esto asegurará la legitimidad y aumentará la aceptación de sus políticas, sino porque los efectos de la influencia indebida en las políticas verdes, la toma de decisiones y su implementación tendrían consecuencias particularmente graves para las comunidades más afectadas por el cambio climático (OCDE, 2022^[15]).

Los países deben adoptar un enfoque coordinado y estratégico para mitigar los riesgos de integridad pública en el sector público, especialmente la corrupción (OCDE, 2017^[43]). Algunos países de la región de ALC han optado por una única estrategia nacional de integridad o anticorrupción (por ejemplo, Argentina, Colombia y Costa Rica), aunque los objetivos estratégicos de integridad pueden compartirse en varios documentos gubernamentales de diversas autoridades. En 2020, Colombia hizo obligatorio que todas las entidades gubernamentales a nivel nacional y subnacional adoptaran el código nacional de integridad, que proporciona un marco consolidado para gestionar sus operaciones y supervisar el cumplimiento de sus funciones. En 2023, Chile adoptó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, una estrategia basada en evidencia y en el diseño de métodos participativos para mejorar los niveles de transparencia, integridad y luchar contra la corrupción. Seis de los siete países de ALC con información disponible han establecido objetivos estratégicos para reducir el fraude y otros tipos de corrupción en todo el sector público. Los esfuerzos para salvaguardar la integridad pública suelen centrarse en áreas como la contratación pública y la gestión de recursos humanos. Solo Argentina, Colombia y Costa Rica tienen estrategias que también consideran al sector privado, las empresas de propiedad pública y las asociaciones público-privadas (Gráfico 1.18).

Gráfico 1.18. Áreas con objetivos estratégicos para mitigar los riesgos de integridad pública, 2020



Fuente: OCDE (2022), Indicadores de Integridad Pública (base de datos) (<https://oecd-public-integrity-indicators.org>).

StatLink  <https://stat.link/m8trgv>

1.4.2. Transparencia y supervisión para proteger contra la corrupción

Para salvaguardar la integridad de los procesos de toma de decisiones y la prestación de servicios, los políticos y altos funcionarios del gobierno deben priorizar la transparencia. Deben divulgar abiertamente cualquier afiliación que puedan tener con grupos de interés que pudieran influir en las iniciativas y políticas, alejándolas del interés público. Aunque cuatro de los seis países de ALC encuestados tienen regulaciones que definen situaciones de conflicto de intereses, y los seis requieren que los funcionarios públicos presenten declaraciones sobre conflictos de interés, estas regulaciones no siempre se aplican en la práctica. Chile es el único país de ALC con una tasa de presentación del 100% de declaraciones de interés entre los miembros del gobierno en los últimos seis años. Argentina es el único país que ha impuesto sanciones por incumplimiento en situaciones de conflicto de intereses en los últimos tres años (véase el Capítulo 3).

Estas preocupaciones y amenazas a la integridad también se traducen en posibles conflictos de interés entre los funcionarios públicos involucrados en la formulación de políticas verdes. A medida que la comunidad global reconoce cada vez más la urgencia de abordar los desafíos ambientales, las decisiones tomadas en la elaboración de políticas verdes tienen implicaciones importantes para el bienestar, tanto de las generaciones actuales como futuras. Sin regulaciones firmes de conflicto de intereses, existe el riesgo de que los funcionarios públicos prioricen intereses personales o de la industria sobre objetivos ambientales más amplios, comprometiendo la legitimidad del proceso de formulación de políticas. Al implementar medidas rigurosas, los gobiernos pueden mantener la transparencia, fomentar la confianza pública y promover un entorno normativo que realmente priorice prácticas sostenibles y la preservación de los recursos naturales. Una forma de fortalecer las regulaciones que evitan conflictos de interés en torno a iniciativas verdes podría ser exigir que los funcionarios públicos involucrados en los procesos de toma de decisiones sobre clima y medio ambiente hagan públicas sus agendas de reuniones, así como los temas allí tratados (OCDE, 2022_[15]).

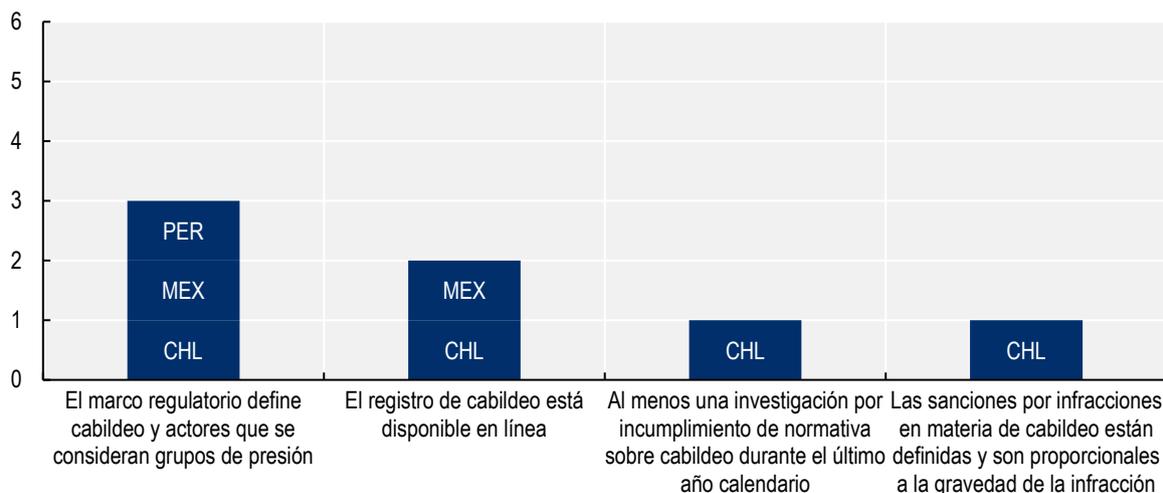
Al diseñar e implementar políticas, los gobiernos también deben involucrar a grupos diversos, incluidos grupos de interés, y considerar los impactos que las políticas tendrán o están teniendo en ellos. En este contexto, la interacción de grupos de interés y el gobierno a través del cabildeo y otras prácticas de influencia son una parte común del proceso democrático (OCDE, 2010_[44]). Sin embargo, las políticas públicas se ven afectadas cuando las prácticas de cabildeo no son transparentes o no están reguladas, y cuando los grupos de interés monopolizan la influencia, manipulan la opinión pública, condicionan las decisiones gubernamentales y, en última instancia, obstaculizan la implementación efectiva de las políticas. Esto es particularmente sensible durante las discusiones sobre políticas climáticas, donde diversos sectores económicos e industrias tienen intereses marcados en los resultados de las negociaciones (OCDE, 2022_[15]).

Las regulaciones sobre las prácticas de cabildeo mejoran la transparencia en el diseño de las políticas, ya que aclaran qué actividades están permitidas o prohibidas, cómo deben divulgarse y cómo se supervisarán. Solo algunos países de la región de ALC cuentan con regulaciones de este tipo. Por ejemplo, Chile, México y Perú definen las prácticas de cabildeo en sus marcos legales. La implementación de estas políticas también es escasa en la región: solo Chile y México tienen registros de cabildeo que pueden consultarse públicamente en línea (Gráfico 1.19).

Para asegurar que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades legales y logren sus objetivos de acuerdo con las reglas ya establecidas, se requiere supervisión y, eventualmente, sanciones en caso de cualquier infracción. El diseño e implementación de mecanismos de supervisión efectivos conllevan la creación de canales claros para la participación ciudadana, el establecimiento de organismos de auditoría independientes y el uso de tecnología avanzada para el monitoreo en tiempo real. Al integrar estos mecanismos, los formuladores de políticas no solo pueden identificar y corregir desviaciones de las políticas establecidas de manera rápida, sino también demostrar su compromiso con la transparencia y su capacidad de respuesta en los procesos de formulación de políticas y prestación de servicios. Este enfoque proactivo asegura que el sector público se mantenga responsable y se esfuerce continuamente por cumplir con las expectativas de los ciudadanos a quienes sirve.

Sin embargo, de los seis países encuestados, solo Chile cuenta con una función de supervisión en el gobierno central para monitorear posibles violaciones de transparencia en prácticas de cabildeo o sanciones por infracciones a las regulaciones de cabildeo. Chile es también el único país de ALC que ha realizado investigaciones sobre incumplimiento con regulaciones de cabildeo en el último año o que ha impuesto sanciones (Gráfico 1.19). Esto resalta las limitadas capacidades de la región para supervisar y sancionar violaciones de prácticas y de regulaciones de cabildeo. Para fortalecer su control sobre las prácticas de cabildeo, incluidas aquellas relacionadas con temas ambientales, los gobiernos de ALC podrían exigir que las divulgaciones sobre las prácticas de cabildeo incluyan información sobre su objetivo, sus beneficiarios, las decisiones que les interesan y los tipos de prácticas utilizadas (OCDE, 2022_[15]). Existen áreas donde la supervisión se está volviendo más común en la región de ALC; por ejemplo, 10 de los 11 países (3 más que en 2019) cuentan con organismos de supervisión encargados de supervisar el trabajo de los responsables de formular políticas mediante la revisión de la calidad del proceso de elaboración de normas, incluidas las actividades de participación de las partes interesadas y la realización de evaluaciones de impacto regulatorio (véase el Capítulo 5).

Gráfico 1.19. Regulaciones, investigaciones y sanciones relacionadas con las prácticas de cabildeo, 2022



Fuente: OCDE (2022), Indicadores de Integridad Pública (base de datos) (<https://oecd-public-integrity-indicators.org>).

StatLink  <https://stat.link/zsb39j>

Los grupos de interés también pueden ejercer una influencia indebida sobre los asuntos públicos si las campañas electorales y los partidos políticos tienen una regulación deficiente. Los seis países de ALC encuestados tienen regulaciones para las campañas electorales y el financiamiento político de los partidos políticos, que prohíben las donaciones anónimas y requieren que las contribuciones se registren y se reporten. A pesar de ello, en los últimos cinco años, los partidos políticos solo han presentado sus cuentas anuales a tiempo en México, en comparación con el 54% de los países de la OCDE en el mismo período. Esto revela que existe una brecha significativa entre las reglas y la práctica en esta área en los países de ALC (véase el Capítulo 3).

Los riesgos de integridad pueden ser mayores para algunas actividades gubernamentales, lo que requiere un enfoque más riguroso en estrategias, herramientas y recursos de mitigación. Este es el caso de la contratación pública y los proyectos de infraestructura, donde los riesgos de corrupción son altos debido a los recursos involucrados, la complejidad de las reglas y operaciones, y el número de partes interesadas involucradas. Hay riesgos de integridad en cada etapa del ciclo de infraestructura o contratación. Por ejemplo, en la etapa de planificación, los conflictos de interés podrían influir en los funcionarios de contrataciones para que aboguen por necesidades específicas que no estén realmente justificadas, o estos podrían favorecer a un licitante específico durante la evaluación de las ofertas o ignorar deficiencias de calidad en los bienes o servicios adquiridos durante la fase de gestión del contrato (OCDE, 2016^[45]). Los mecanismos utilizados más comúnmente por los países de ALC para abordar los conflictos de interés en la contratación pública son requerir que los funcionarios presenten declaraciones obligatorias de ausencia de conflicto de interés y limitar la participación de funcionarios públicos y de quienes ocupan cargos políticos en oportunidades de contratación pública (14 de 19 países, 74%), y llevar a cabo todos los procesos de contratación de infraestructuras en línea con el objetivo de fomentar la transparencia (8 de 15 países, 53%). Sin embargo, solo Uruguay ofrece incentivos para que los funcionarios eviten manipular las ofertas para favorecer a un licitante (véanse los Capítulos 7 y 8).

Referencias

- Alejos, L. (2018), *Three Essays in Public Finance in Developing Countries*, University of Michigan, Ann Arbor, MI, https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/147524/lalejos_1.pdf?sequence=1. [11]
- AON (2023), *Weather, Climate and Catastrophe Insight*, AON, <https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.aspx>. [32]
- Beylis, G. et al. (2023), *Latin America and the Caribbean Economic Review, October 2023 - Wired: Digital Connectivity for Inclusion and Growth*, The World Bank, <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2038-0>. [28]
- Brezzi, M. et al. (2021), "An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges", *OECD Working Papers on Public Governance*, No. 48, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/b6c5478c-en>. [14]
- Cardenas, M. et al. (2021), "Fiscal Policy Challenges for Latin America during the Next Stages of the Pandemic: The Need for a Fiscal Pact", *IMF Working Papers* 2021/077, <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/17/Fiscal-Policy-Challenges-for-Latin-America-during-the-Next-Stages-of-the-Pandemic-The-Need-50263>. [30]
- CEPAL (2023), *Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo*, <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es>. [34]
- CEPAL (2022), *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48518-panorama-social-america-latina-caribe-2022-la-transformacion-la-educacion-como>. [5]
- FMI (2023), *World Economic Outlook Dataset, October 2023*, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October>. [6]
- FMI (2020), *Fiscal Policy at the Time of a Pandemic: How have Latin America and the Caribbean Fared?*, <https://www.imf.org/en/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook-western-hemisphere>. [31]
- Galindo, A. y V. Nuguer (2023), *2023 Latin American and Caribbean Macroeconomic Report: Preparing the Macroeconomic Terrain for Renewed Growth*, Inter-American Development Bank, <https://doi.org/10.18235/0004780>. [29]
- Gerson, D. (2020), *Leadership for a high performing civil service: Towards senior civil service systems in OECD countries*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ed8235c8-en>. [39]
- Jafino, B. et al. (2020), "Revised estimates of the impact of climate change on extreme poverty by 2030", *The World Bank*, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/706751601388457990/pdf/Revised-Estimates-of-the-Impact-of-Climate-Change-on-Extreme-Poverty-by-2030.pdf>. [10]
- Keefer, P. y C. Scartascini (2022), *Trust: The Key to Social Cohesion and Growth in Latin America and the Caribbean*, Inter-American Development Bank, Washington, DC, <https://doi.org/10.18235/0003911>. [13]
- Latinobarometro (2023), *Informe Latinobarómetro 2023: La recesión democrática de América Latina*, <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>. [41]
- Naranjo Bautista, S. et al. (2022), *Women Leaders in the Public Sector of Latin America and the Caribbean: Gaps and Opportunities*, Inter-American Development Bank, <https://doi.org/10.18235/0004597>. [20]
- OCDE (2023), "Better Regulation for the Green Transition", *OECD Public Governance Policy Papers*, No. 40, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/c91a04bc-en>. [26]
- OCDE (2023), *Gender budgeting in OECD countries 2023*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/647d546b-en>. [24]
- OCDE (2023), *Government at a Glance 2023*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/3d5c5d31-en>. [12]
- OCDE (2023), *Improving the Landscape for Sustainable Infrastructure Financing*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/bc2757cd-en>. [35]
- OCDE (2023), *Public Employment and Management 2023: Towards a More Flexible Public Service*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5b378e11-en>. [37]

- OCDE (2023), *Social Institutions and Gender (indicator)*, <https://doi.org/10.1787/7b6cfcf0-en> (consultado el 15 de noviembre de 2023). [7]
- OCDE (2023), *Towards Climate Resilience and Neutrality in Latin America and the Caribbean: Key Policy Priorities*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/278e52e8-en>. [9]
- OCDE (2022), *2022 Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People*, OECD Publishing, Paris, <https://www.oecd.org/mcm/Recommendation-on-Creating-Better-Opportunities-for-Young-People.pdf>. [22]
- OCDE (2022), *Building Trust and Reinforcing Democracy: Preparing the ground for government action*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/76972a4a-en>. [15]
- OCDE (2022), *Building Trust to Reinforce Democracy: Main findings from the 2021 OECD survey on drivers of trust in public institutions*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/b407f99c-en>. [8]
- OCDE (2022), "Delivering for youth: How governments can put young people at the centre of the recovery", *OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/92c9d060-en>. [17]
- OCDE (2022), *The Protection and Promotion of Civic Space: Strengthening Alignment with International Standards and Guidance*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/d234e975-en>. [18]
- OCDE (2021), *How's Life in Latin America?: Measuring Well-being for Policy Making*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/2965f4fe-en>. [3]
- OCDE (2021), *OECD Regulatory Policy Outlook 2021*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/38b0fdb1-en>. [27]
- OCDE (2021), *Women in infrastructure: Selected stocktaking of good practices for inclusion of women in infrastructure*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9eab66a8-en>. [23]
- OCDE (2020), *Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/13130fbb-en>. [4]
- OCDE (2020), *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/339306da-en>. [19]
- OCDE (2019), "Recommendation of the Council on Policy Coherence for Sustainable Development", *OECD Legal Instruments*, OECD/LEGAL/0381, OCDE, París, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0381>. [25]
- OCDE (2019), "Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability", *OECD Legal Instruments*, OECD/LEGAL/0445, OCDE, París, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0445>. [40]
- OCDE (2018), *Integrity for Good Governance in Latin America and the Caribbean: From Commitments to Action*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264201866-en>. [42]
- OCDE (2017), "Recommendation of the Council on Public Integrity", *OECD Legal Instruments*, OECD/LEGAL/0435, OCDE, París, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435>. [43]
- OCDE (2016), *2015 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264252820-en>. [21]
- OCDE (2016), *Preventing corruption in public procurement*, OCDE, París, <https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf>. [45]
- OCDE (2015), *Going green: Best practices for sustainable procurement*, OCDE, París, https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/Going_Green_Best_Practices_for_Sustainable_Procurement.pdf. [36]
- OCDE (2010), "Recommendation of the Council on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying", *OECD Legal Instruments*, OECD/LEGAL/0379, OCDE, París, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0379>. [44]
- OCDE et al. (2022), *Latin American Economic Outlook 2022: Towards a green and just transition*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/3d5554fc-en>. [1]

- OCDE et al. (2022), *Latin American Economic Outlook 2022: Towards a Green and Just Transition*, OECD Publishing, Paris, [2]
<https://doi.org/10.1787/3d5554fc-en>.
- OCDE/Banco Mundial/ONU Medio ambiente (2018), *Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure*, OECD Publishing, Paris, [33]
<https://doi.org/10.1787/9789264308114-en>.
- Salazar-Morales, D. y L. Lauriano (2021), "A Typology of the Latin American Civil Servant: Patronage Appointee, Technocrat, Loyalist, or Careerist", in *The Palgrave Handbook of the Public Servant*, Springer International Publishing, Cham, [38]
https://doi.org/10.1007/978-3-030-29980-4_71.
- Warren, M. (2022), "What Can Democratic Participation Mean Today?", *Political Theory*, Vol. 30/5, pp. 677-701, [16]
<http://www.jstor.org/stable/3072498>.



From:

Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024

Access the complete publication at:

<https://doi.org/10.1787/4abdba16-en>

Please cite this chapter as:

OECD (2024), “Fortalecer la participación, la gestión pública y la integridad para generar confianza y apoyar la transición verde en América Latina y el Caribe”, in *Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024*, OECD Publishing, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/8e04a5c0-es>

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Extracts from publications may be subject to additional disclaimers, which are set out in the complete version of the publication, available at the link provided.

The use of this work, whether digital or print, is governed by the Terms and Conditions to be found at <http://www.oecd.org/termsandconditions>.